

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Visto el expediente del recurso de revisión interpuesto por el recurrente y señalado al rubro, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 8 de septiembre de 2014, el recurrente presentó la solicitud de acceso a la información (SAI) a través del sistema electrónico Infomex, a la que correspondió el folio 0912100050014, con la que solicitó lo siguiente:

"Estados Financieros auditados de Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V.; de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Informes trimestrales que Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., hayan presentado en términos y/o con la Información que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas de Servicio Local, en donde informa los minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen, con respecto al tráfico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

Otros datos para facilitar su localización

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., exhibieron los documentos solicitados para conocimiento de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones en cumplimiento de sus títulos de concesión y de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y diversa regulación aplicable en la materia, por lo que dicha documentación obra en los archivos y registros del Instituto Federal de Telecomunicaciones.”.

II. El 3 de octubre de 2014, la Unidad de Enlace, mediante el oficio número IFT/212/CGVI/UETAI/041/2014, informó al ahora recurrente respecto de la ampliación del plazo para dar respuesta que acordó el Comité de Información en su XII Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2014, en los siguientes términos:

“(…)

Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que esta Unidad de Enlace con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, turnó su solicitud de acceso a la entonces Unidad de Supervisión y Verificación.

El área consultada, mediante oficio IFT/D04/USV/SE/1291/2014 de fecha 17 de septiembre del año en curso, externó lo siguiente:

“(…)

Sobre el particular, para atender las SAI’s antes citadas se solicita a ese H. Comité que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, otorgue prórroga por el término de 20 días hábiles.

Lo anterior, obedece a lo siguiente:

Mediante las SAI’s 0912100015514 y 0912100021414, se solicitó lo siguiente:

“(…)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

0912100021414:

"Estados Financieros auditados de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Informes trimestrales que Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. haya presentado en términos y/o con la información que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas de Servicio Local, en donde informa los minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen, con respecto al tráfico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones."

La Unidad de Enlace de este Instituto, emitió las respuestas a las solicitudes como se transcribe, en su parte conducente, a continuación:

(...)

0912100021414:

*"De esta manera, con base en los fundamentos y motivos manifestados por la Unidad de Supervisión y Verificación, el Comité de Información en el marco de su XII sesión extraordinaria, celebrada el 27 de mayo de 2014, **confirmó el contenido de las versiones públicas** en términos de lo dispuesto por los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el 82 de la Ley de Propiedad Industrial; 70, fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, segundo párrafo del Octavo y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, toda vez que contienen información relativa al patrimonio de una persona moral, su situación financiera, los datos económicos/contables y técnicos/financieros, los cuales de*

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

otorgarse, podrían poner en desventaja comercial al concesionario frente a un competidor. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción IV de su Reglamento."

A ambas respuestas se les interpuso Recurso de Revisión, a los que se les asigno los números 2014002933 y 2014003137 respectivamente, mismos que aún no han sido resueltos por el Consejo de Transparencia de este Instituto.

En ese sentido, esta Unidad solicita a ese H. Comité las prórrogas que nos ocupan, toda vez que se estima conveniente conocer el sentido de las resoluciones que emita el Consejo de Transparencia de este Instituto con respecto de los citados Recursos de Revisión, previo a dar respuesta a las solicitudes de Información que nos ocupan.

(...)"

En este sentido, a partir de la petición efectuada por la Unidad Administrativa anteriormente referida, el Comité de Información acordó ampliar el plazo para dar respuesta a la solicitud de mérito en el marco de su XXVI (Vigésimo Sexta) sesión extraordinaria, celebrada el pasado 23 de septiembre del año en curso; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento.

(...)"

III. El 4 de noviembre de 2014, la Unidad de Enlace, mediante oficio número IFT/212/CGVI/UETA/212/2014, remitió la respuesta a la SAI de mérito mediante el sistema Infomex, informando al solicitante lo siguiente:

"(...)

Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que esta Unidad de Enlace con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, turnó su solicitud de acceso a la entonces Unidad de Supervisión y Verificación.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Es importante señalar que, en virtud de que su solicitud de acceso a la información fue presentada ante esta Unidad de Enlace el 8 de septiembre de 2014, en esa fecha todavía estaba vigente el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado el 23 de septiembre de 2013. A partir del 26 de septiembre del año en curso, dicho documento quedó abrogado por el nuevo Estatuto Orgánico, por ello, las funciones y denominaciones de las áreas han sido modificadas a esta fecha; de esta manera, la Unidad de Supervisión y Verificación cambió de denominación a la fecha de la respuesta de la solicitud de acceso a Unidad de Cumplimiento.

Como es de su conocimiento, en el marco de la XXVI (Vigésimo Sexta) sesión extraordinaria, celebrada el pasado 23 de septiembre del año en curso, la Unidad en cita, solicitó la ampliación del plazo de respuesta, la cual, fue aprobada por el Comité de Información.

Posteriormente, mediante oficio número IFT/225/UC/SE/278/2014 de fecha 27 de octubre de 2014, la Unidad de Cumplimiento manifestó lo siguiente:

"(...)

Asimismo, cabe señalar que no obran en los archivos de esta Unidad registros documentales de lo siguiente:

- Información solicitada de Iusacell PCS de México S.A. de C.V., del año 2005, ya que dicho operador inicio operaciones en 2006.

Ahora bien, por lo que toca a la información restante que sí obra en los archivos de esa Unidad, de conformidad con la resolución emitida por el Consejo de Transparencia de este Instituto, en el expediente 18/14, relativo al Recurso de Revisión 2014003314, interpuesto a la respuesta otorgada por este Instituto a la solicitud de Acceso a la Información 0912100021414, en la que la información solicitada es exactamente la misma que la que nos ocupa, pero de operador distinto, se hace necesario manifestar lo siguiente:

La información que es entregada por los concesionarios en cumplimiento a la **Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas del Servicio Local**, consiste en:

"La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

troncales de conmutador, que existan al termino del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

La cantidad total de troncales de interconexión asignada a cada central local, desglosada por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

Informar respecto de las solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo."

Es información CONFIDENCIAL de conformidad con lo establecido en los artículos 18, fracción I y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, porque es información que versa sobre información técnica de la red de operadores y por lo tanto de su patrimonio y se observa que no existe una disposición que imponga una obligación a los concesionarios a hacer pública esta información o que considere a esta información como pública.

Ahora bien, la Información entregada por los concesionarios en cumplimiento a la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas del Servicio Local, consiste en:

"Los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red".

Es información RESERVADA, de conformidad con lo establecido en el numeral 14, fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Por su parte, la información contenida en los reportes de estados financieros y en los reportes anuales definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, es información CONFIDENCIAL, de conformidad con lo establecido en los artículos 18, fracción I y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pues es información relativa al patrimonio de una persona moral toda vez que presenta información financiera, comprende hechos de carácter económico y contable relativos a una persona moral dado que

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

contiene información sobre cuentas de ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados.

A mayor abundamiento, es importante destacar que las personas jurídicas colectivas, también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier Intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido.

Por lo anterior, la información requerida debe ser tutelada por este instituto, toda vez que la misma contiene datos de carácter económico y contable relativos al patrimonio de los Concesionarios, misma que tiene el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales.

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la LFTAIPG y 70, fracción III de su Reglamento, solicito a ese H. Comité de Información, emita la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el ánimo de favorecer el principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6° de la LFTAIPG, se somete ante ese Comité de Información, las versiones públicas de los documentos solicitados, en las que se testa la información contable propiedad de los concesionarios de la que se advierte su situación financiera, datos económicos/contables y técnicos/financieros relativos al patrimonio de los concesionarios, información técnica de la red de los concesionarios, información netamente relativa al patrimonio de las personas morales misma que tiene el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales.

Hago de su conocimiento que la versión pública que nos ocupa está disponible en 3 CD's y consta de 9,737 fojas.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 segundo párrafo de la LFTAIPG y 30 segundo párrafo de su Reglamento.

*En este sentido, a partir de las manifestaciones de la **Unidad de Cumplimiento**, el Comité de Información en el marco de su XIX (Décimo Novena) Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de octubre del presente año, **aprobó las versiones públicas** con carácter de confidencial, con respecto a los siguientes contenidos de la solicitud de acceso:*

(i) La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o troncales de conmutador, que existan al termino del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

(ii) La cantidad total de troncales de interconexión asignada a cada central local, desglosada por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

(iv) solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo.

Toda vez que contienen datos técnicos de la red de operadores y por lo tanto, guardan relación con el patrimonio de una persona moral; lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Aunado a lo anterior, se aprobaron con carácter confidencial las versiones públicas de los reportes de estados financieros y de los reportes anuales definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, toda vez que presenta información financiera que comprende hechos de carácter económico y contable y a su vez, contiene información sobre cuentas de ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados, cuya clasificación tiene su fundamento en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el cardinal Trigésimo Sexto,

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014
Folio del Recurso de Revisión: 2014006150
Expediente: 31/14

fracción II de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Por último, el órgano colegiado, aprobó las versiones públicas de la documentación referente a los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, toda vez que contiene ciertas partes o secciones que son consideradas como información reservada, toda vez que por disposición expresa de una Ley es considerada con tal carácter, tal como lo dispone el artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los cardinales 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como los numerales cuarto, quinto, décimo quinto y vigésimo quinto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 29, fracción III y 45 de la Ley y 70, fracción IV de su Reglamento.

*El acta en cita podrá consultarla en el siguiente vínculo electrónico:
<http://www.ift.org.mx/iftweb/transparencia-2comite-de-informacion/actas/>*

Por último, con respecto a la manifestación efectuada por la Unidad de Cumplimiento en torno a la información que no obra en sus archivos, consistentes en:

- Información solicitada de Iusacell PCS de México S.A. de C.V., del año 2005, ya que dicho operador inicio operaciones en 2006.*

Es de relevancia hacer notar, que toda vez que Iusacell PCS de México S.A. de C.V. no se encontraba obligada a presentar la información a la que se hace el punto que precede, toda vez que inició operaciones en el año 2006, no es necesario declarar formalmente la inexistencia, toda vez que le es aplicable el Criterio 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual refiere que "no será necesario que el comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia", como lo es en la especie.

Es importante mencionar, que en atención a la modalidad por usted referida en su solicitud de acceso, la **Unidad de Cumplimiento** en términos de lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 51 de su Reglamento, pone a su disposición las versiones públicas de referencia 3 discos compactos (CD) o, en su caso, en 9,737 copias simples o certificadas. En este tenor, a continuación encontrará un cuadro mediante el cual se le señala el costo de la reproducción de la información, a fin de que elija de manera informada, la forma en que desea tener acceso a la misma:

MODALIDAD	Costo por unidad *	Total (No incluye gastos por envío)
3 CD	\$10.00	\$30.00
9,737 copias simples	\$0.50	\$4,868.50
9,737 copias certificadas	\$16.00	\$155,792.00

*El fundamento del costo por reproducción de la información puede consultarlo en los siguientes vínculos electrónicos:

<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/costosMaterialesINFOMEX.pdf>

<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/349-B-190.pdf>

9/11/14

En caso de que decida realizar el pago de la reproducción de la documentación en cualquiera de las modalidades anteriormente referidas, le pedimos de la manera más atenta que: (i) envíe un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica unidad.enlace@ift.org.mx confirmándonos lo anterior, e indique, (ii) si recogerá la información en nuestras instalaciones o pagará el importe del envío – el cual, se calcula de manera automática en una relación peso/distancia – Si requiriera recibir la información en el domicilio por usted señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, tendríamos que añadir el costo correspondiente por el envío.



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Consecuentemente, a partir de que recibamos su correo electrónico con los detalles anteriormente requeridos, estaremos en la posibilidad de hacerle llegar el formato de comprobante de pago (ficha de pago) por medio electrónico, con el monto que corresponda.

(...)"

IV. El 26 de noviembre de 2014, el recurrente interpuso, mediante el sistema Infomex, el recurso de revisión, al que se le asignó el número de folio 2014006150, mediante el que manifestó lo siguiente:

(...)

Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51, 52, 54, 55 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se interpone RECURSO DE REVISIÓN, en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, ya que se considera que la información entregada, en virtud de solicitud de información, es incompleta, así como que se omitieron partes o secciones clasificadas que son, por disposición legal, información pública; asimismo, se reclama en el presente recurso la indebida clasificación que realizó tanto la Unidad de Enlace como el Comité de Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Aclaración Previa.

Previo a exponer los puntos exigidos en el artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conviene exponer los siguientes rubros.-

Competencia para resolver el Recurso de Revisión

El pasado 7 de febrero de 2014 se publicó una reforma constitucional, donde se desprende que El Poder Reformador de la Constitución determinó modificar el artículo 6º, en lo correspondiente a materia de transparencia y acceso a la información, a efecto que dispusiera lo siguiente:

(...)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, Integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

(...)"

(Énfasis añadido)

De lo anterior se desprende claramente que el Poder Reformado de la Constitución dispuso, en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la creación de un órgano autónomo que tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los siguientes entes obligados:

- i) Cualquier entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;*
- ii) Órganos autónomos;*
- iii) Partidos políticos;*
- iv) Fideicomisos y fondos públicos; y*

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

v) Cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal

Siendo la única excepción para dicha competencia los asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

Es así, que resulta irrefutable que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo garante de la transparencia creado por disposición Constitucional, es el competente para para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de órganos autónomos.

De ahí, que si tomamos en cuenta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un organismo constitucional, es inconcuso que en materia de transparencia, el órgano competente para conocer de los asuntos relacionados con acceso a la información pública en poder de aquél es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Ahora bien, debe destacarse que la facultad constitucional conferida al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, entró en vigor al día siguiente de su publicación, tal como lo establece el artículo Primero Transitorio del Decreto de Reforma publicado el 7 de febrero de 2014; no siendo óbice lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, pues éste condiciona única y exclusivamente el ejercicio de las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el artículo 6° constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se emita la legislación secundaria.

9/11/17

Es decir, el Poder Reformador de la Constitución dispuso que mientras no exista legislación secundaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no podrá conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley; así como los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, sean atraídos.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Así, de una correcta interpretación del citado Sexto Transitorio, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 6° constitucional reformado, es dable sostener que cuando aquél precepto se refiere a "recursos de revisión", es en el sentido que lo establece el citado artículo constitucional, esto es, aquellos que se interpongan por los particulares respecto de las resoluciones de los órganos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal, máxime que el propio texto constitucional hace un reenvío expreso al mencionar: "en los términos que establezca la ley".

Por tanto, y tomando en consideración que no existe impedimento constitucional alguno, resulta inconcuso que el órgano competente para conocer el presente recurso de revisión contra actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por mandato constitucional, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; más aún si partimos de la base que TODOS los Poderes de la Unión y órganos autónomos constitucionales pueden ser revisables, ni modo que sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones se salve de dicho mandato constitucional.

Derechos Humanos y Principio Pro Personae

Es importante tener en consideración, a efecto de que sea tomado en cuenta durante la tramitación del presente recurso y en la resolución del mismo, que del artículo 1o constitucional se desprende claramente la obligación de toda autoridad -administrativa, legislativa y judicial-, dentro del marco de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dichos principios consisten en lo siguiente:

a) Universalidad.-que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad Internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona y, deben de respetarse en beneficio de ésta, sin distinción alguna.

b) Interdependencia e indivisibilidad.-que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente.

c) Progresividad.-constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Lo anterior se desprende y robustece con el siguiente criterio:

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la "Masacre de Mapiripán vs Colombia) ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

de los tiempos y las condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los estados de excepción se "suspenden", pues en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3.

Tesis: 1.4o.A.9 K (10a.). Página: 2254

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Ahora bien, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Robustece a lo anterior la siguiente tesis:

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1946; se publica nuevamente con las modificaciones en rubro, texto y precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2.

Tesis: IV.2o.A.15 K(10a.). Página: 1289

En este orden de ideas, el artículo 1º constitucional en comento impone la obligación de interpretar las normas y actos relativos a los derechos humanos de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, constituye un parámetro obligatorio de carácter interpretativo, ya que establece una norma que obliga a las autoridades a interpretar las normas conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas (bajo el principio *pro homine* o *pro persona*).

Es así, que a partir de junio de 2011, toda autoridad, conforme al artículo 1o. constitucional, debe de resolver los asuntos sometidos bajo su potestad procurando un efecto expansivo de los derechos humanos -lograr el mayor alcance posible de los mismos- y buscando siempre resolver cualquier situación concreta en razón a una protección más amplia para las personas; esto es, tomando en cuenta el peso de los derechos fundamentales, en caso de existir una antinomia entre un acto o una ley y un derecho fundamental, resolverla siempre en favor de este último y en beneficio de la persona.

El referido principio *pro personae*, ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.

Por tanto, la aplicación del principio *pro personae* en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio:

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio *pro personae* que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio *pro personae* en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.

Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos.

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.

Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo I. Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.) Página: 659.



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

En este tenor, las autoridades deben de observar tanto las disposiciones nacionales e internacionales que consagren derechos fundamentales para las personas, a efecto de que sus resoluciones atiendan a las mismas y no sean contrarias a ellas.

De esta manera, este H. Instituto se encuentra obligada a velar no sólo por los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona.

Transparencia y máxima publicidad

Nuestra Constitución reconoce en su artículo 6º, entre otras muchas cosas, el derecho fundamental de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, prevé que toda información que obre en poder del Estado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así como la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Gomes Lund vs Brasil y Claude Reyes vs Chile, en donde, interpretando el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sostenido que, de acuerdo a la protección que otorga dicha Convención, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.

Así, el Tribunal Interamericano ha establecido -Claude Reyes vs Chile párrafo 77- que el artículo 13 de la Convención Americana, al estipular expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso y conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.

Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que la información circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.

Por otra parte, la Corte Interamericana ha determinado, en los Casos Gomes Lund vs Brasil y Claude Reyes vs Chile, que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.

De ahí, que es dable sostener que este H. Instituto, atendiendo a los artículos 1° y 6° de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe aplicar los principios de máxima publicidad y ponderar entre la supuesta afectación a un operador de redes públicas de telecomunicaciones y el derecho a recibir cualquier tipo de información, máxime que existen preceptos y lineamientos que establecen que la misma es de carácter pública, como acontece en el particular.

Expuesto lo anterior, se procede a solventar los puntos que mandata el artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los siguientes.-

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

I. Dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud.- Instituto Federal de Telecomunicaciones:

II. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones:

(...)

Terceros Interesados: Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS

Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V. Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V. y Operadora Unefon, S.A. de C.V. (en adelante Grupo Iusacell) con domicilio ubicado en Calle Montes Urales No. 460, 1er Piso, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, D.F.

III. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado.- El oficio IFT/212/CGVI/UETAI/212/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014 fue notificado el día 04 de noviembre de 2014, en el cual la Unidad de Enlace del Instituto Federal de Telecomunicaciones comunica que se va a dar una versión pública de la información solicitada, pues supuestamente ésta contiene datos sensibles y comerciales que deben ser protegidos, aunado a que señala que no puede proporcionar cierta información porque no obra en los archivos de la Unidad de Cumplimiento en virtud de que la empresa a la cual se le solicita la información respectiva, no estaba obligada a presentarla.

Ahora bien, dicha autoridad refiere que pone a disposición las versiones públicas en tres discos compactos o, en su caso, en 9,737 copias simples o certificadas, la cual no solo se aleja del principio de máxima publicidad, sino clasifica como confidencial información que por disposición oficial es pública y debe estar inscrita en el Registro de Telecomunicaciones, así como que no entrega otra por supuestamente no obrar en autos, ya que refiere que la empresa de la cual se requiere dicha información, no estaba obligada a presentarla.

IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios.-

Chilite



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

La indebida clasificación de la información entregada descrita en el apartado inmediato anterior, se recurre y, por tanto se plantean como petitorios los siguientes puntos.-

Primero. Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada entregada en una versión pública, ya que dicha información, contrario a lo que sostiene éste, es pública por disposición del ordenamiento jurídico.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuenta diversas facultades que se desprenden de los artículos 6° y 28 constitucionales y 7, 15, 124, 176, 177, 178 y 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de las cuales se desprende que es órgano autónomo encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y que para el logro de estos objetivos, el citado Instituto puede elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales en materia de telecomunicaciones.

Asimismo, la citada Ley establece que el IFT debe llevar el registro de telecomunicaciones, en el que se inscribirán todos los actos y puntos señalados en la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como todo lo que establezcan demás planes, reglamentos y lineamientos que indiquen una inscripción.

Así, se desprende que de acuerdo con el artículo 178 de Ley Federal de Telecomunicaciones, la información contenida en el Registro de Telecomunicaciones es de consulta pública salvo aquella que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial o reservada.

Precisado lo anterior, resulta pertinente revisar las Reglas de Servicio Local, mismas que establecen en su Regla 42 que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.

De lo anterior se desprende que, al momento de dictarse las Reglas de Servicio Local, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones consideró indispensable contar con un registro público de los minutos de tráfico que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, estableciendo con claridad qué información deben remitir los concesionarios para tales efectos.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Ahora bien, es preciso resaltar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene como objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia, tal y como se establece en su artículo 1°.

En tal sentido, se corrobora de un claro interés público y social en el adecuado funcionamiento del sistema de telecomunicaciones, y toda su organización y rectoría estatal tienden a propiciar mejores condiciones de servicio, en beneficio de los usuarios.

Atento a lo anterior, inclusive permisible aseverar que el reconocimiento a la trascendencia social y pública que tiene el adecuado funcionamiento del sistema de telecomunicaciones, también se establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dado que el artículo 4°, fracción II y IV de dicho ordenamiento establece que entre sus objetivos, está el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos y transparentar la gestión pública.

De manera particular, la actualización del registro de telecomunicaciones-obligación legal del IFT dispuesta por la Ley Federal de Telecomunicaciones-constituye también una obligación de transparencia, en términos de lo señalado en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra señala:

"Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

(...)

XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

(...)

(Énfasis añadido)"

Lo anterior implica que el Registro de Telecomunicaciones, al ser un informe generado por el IFT por mandato de una disposición legal -Ley Federal de Telecomunicaciones- es una obligación de transparencia que el sujeto obligado debería poner a disposición del público y actualizar, de conformidad con el artículo transcrito.

De igual manera, el artículo 7, fracción XII de la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que los sujetos obligados deben de poner a disposición del público y de manera oficiosa, entre otra, la información relativa a concesiones otorgadas por cada uno de ellos; lo cual encuentra su desarrollo en el correlativo 20 del Reglamento de la Ley en cita, el cual sostiene lo siguiente:

"Artículo 20. Las dependencias y entidades deberán de publicar en sus sitios de internet, la información relativa a concesiones, autorizaciones y permisos que otorguen. Dicha información deberá contener como mínimo:

I. La unidad administrativa que los otorgue;

II. El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona moral concesionaria, autorizada o permisionaria;

III. El objeto y vigencia de la concesión, autorización o permiso, y

IV. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones."

Como se observa, la materia de concesiones amerita un tratamiento especial en la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a causa del interés público que existe en transparentar lo relativo al otorgamiento, regulación y cancelación de las concesiones (en tanto que implican la explotación de bienes y servicios públicos); así como respecto al desempeño de los concesionarios y el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en los títulos de concesión.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Ahora, es necesario enfatizar que las materias y documentos mencionados como obligaciones de transparencia, en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no limitan el acceso a otra información relacionada que no esté prevista de manera explícita en dicho numeral.

Por el contrario, estos supuestos legales específicos constituyen una pauta respecto de aquellas materias que, por su trascendencia, requieren un tratamiento especial y extensivo en cuanto a su publicidad, para favorecer la rendición de cuentas en favor de los ciudadanos.

En ese orden de ideas, en atención al principio de máxima y transparencia publicidad, los particulares están en pleno derecho de requerir y obtener respuesta, sobre información -con mayor grado de detalle y especificidad- respecto de las materias establecidas como obligaciones de transparencia.

Lo anterior, dado que el desempeño de los concesionarios, es un elemento indispensable para la toma de la decisión de revocar o prorrogar el título correspondiente y, en dicho sentido, los documentos que reflejen el cumplimiento o incumplimiento de un determinado concesionario a sus obligaciones, constituye información nodal para la rendición de cuentas respecto de los asuntos públicos, pues son el sustento del refrendo que la sociedad en su conjunto otorgar al concesionario en cuestión.

Así, de los señalamientos vertidos con anterioridad, es posible establecer que existe un claro interés público por transparentar:

- 1. Lo relativo al otorgamiento y revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones;*
- 2. El aprovechamiento o utilización que los concesionarios den a la redes públicas de telecomunicaciones, a través del ejercicio de la concesión que les sea otorgada; y*
- 3. El ejercicio que la autoridad dé a las atribuciones de rectoría sobre el sector, que le son otorgadas.*

IFT



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Luego entonces, queda patente que el interés público existente en torno a la materia no se limita a alguno de los tres aspectos arriba mencionados, sino que además, abarca de una forma amplia todo el procedimiento relativo al otorgamiento, aprovechamiento, regulación, y en su caso, revocación, de las concesiones públicas de las telecomunicaciones.

Por lo anterior, es importante señalar que la interdependencia que existe entre los tres aspectos señalados, puesto que no resultaría posible valorar para la ciudadanía, si el órgano regulador ha ejercido sus atribuciones de rectoría de la forma que la ley mandata, sin conocer el aprovechamiento que de la concesión ha hecho el concesionario.

En este sentido, en consideración a la existencia de dicho interés público, esta Autoridad Revisora, de acuerdo a los objetivos planteados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe de encontrar la manera de transparentar la información en materia de telecomunicaciones de tal suerte que permita la rendición de cuentas en relación con los tres ámbitos señalados, es decir, que posibilite a los ciudadanos valorar el desempeño del sujeto obligado en lo que hace al otorgamiento y revocación, así como regulación, de las concesiones en materia de telecomunicaciones; y también conocer y valorar, en consecuencia, el aprovechamiento que los concesionario hagan del bien que les fue concesionado.

En el caso específico, debe advertirse, contrario a lo sostenido por la Unidad de Enlace del IFT, que la información solicitada consiste en información que debió ser entregada por un concesionario al IFT, en cumplimiento a obligaciones establecidas en los artículos 124, 176, 177, y 178 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de diciembre de 1998-; el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local; artículo 36 fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y; artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

En ese sentido, se trata de información que gira en torno a un concesionario, por lo que pueden destacarse las siguientes notas distintivas:

- Fue generada por un concesionario;
- Fue entregada por el concesionario a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones hoy IFT, en cumplimiento a obligaciones previstas por Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones, en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en las Reglas de Servicio Local, en el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
- Es información que obra en los archivos del IFT y como tal, constituyen documentos susceptibles de ser requeridos a través de una solicitud de acceso a la información pública gubernamental, en términos de los artículos 2 y 3, fracciones III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Así, las cosas, dichos documentos contribuirán a valorar si Grupo Iusacell cumple con la separación contable que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones y con la obligación que le impone el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de proveer información contable por servicio, así como si ha informado del tráfico de minutos cursados conforme a las Reglas de Servicio Local y si hace públicos sus estados financieros como mandataba el 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada.

De igual forma, al tenor de dicha información se podría valorar si Grupo Iusacell cumple con sus obligaciones legales y con las de sus títulos de concesión.

Todo ello derivado de la utilización que el concesionario mantiene respecto de redes públicas de telecomunicaciones, rubro que, como se señaló con antelación, reviste un especial interés público.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Por consiguiente, en atención a todo lo expuesto, es dable sostener que:

- 1. La información solicitada al sujeto obligado es de interés público y, por ello, debe de ser entregada a los particulares;*
- 2. La información solicitada al obrar, por disposición del marco jurídico en el Registro de Telecomunicaciones, es pública y debe y puede ser consultada por cualquier persona*
- 3. Una manera que pueden constatar los ciudadanos que Grupo Iusacell cumple con su título de concesión y con las obligaciones legales, es consultando la información solicitada;*
- 4. Una manera de verificar y constatar que el IFT esté actuando dentro del marco jurídico, en relación al cumplimiento de las obligaciones del concesionario Grupo Iusacell es verificando la información solicitada;*
- 5. La Unidad de Enlace del sujeto obligado al clasificar y reservar la información debió de considerar que la misma es de interés público;*
- 6. La Unidad de Enlace del sujeto obligado al clasificar y reservar la información debió de considerar que la misma es pública al existir mandato en el ordenamiento jurídico para que se inscriba en el Registro de Telecomunicaciones;*
- 7. La Unidad de Enlace del sujeto obligado al clasificar y reservar la información se abstuvo de ponderar entre el interés público y el derecho a la secrecía de ciertos datos del concesionario Grupo Iusacell.*

Es así, que se sostiene que la clasificación y reserva contenida en la versión pública de la información solicitada fue errónea y contraria a los principios de máxima publicidad y acceso a la información y, por tanto, se pide se revoque la determinación de la Unidad de Enlace y se entregue la información sin la clasificación y reserva.

Cabe destacar que los anteriores argumentos medularmente han sido previamente sustentados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al resolver los expedientes 3933/09 y 3935/09.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Segundo.- Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información, contrario a lo que sostiene éste, no es información reservada y debe de obrar en el Registro de Telecomunicaciones.

En primer término, debe señalar que los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establecen lo siguiente:

"Artículo 18. Como información confidencial se considerará:

I. La entrega con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y

(...)

Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial"

Por su parte el artículo Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, dispone lo siguiente.

"Trigésimo Sexto.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, el Reglamento y los presentes Lineamientos, los particulares podrán entregar a las dependencias y entidades con carácter de confidencial, aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley y de la cual sean titulares, entre otra:

I. La relativa al patrimonio de una persona moral;

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y

III. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad."

En un primer acercamiento, de las normas transcritas se advierte que la información que los sujetos obligados poseen y que haya sido entregada por particulares con carácter de confidencialidad en términos del artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe ser clasificada como confidencial.

Entre dicha información, se encuentra, por ejemplo, la de carácter patrimonial de las personas morales, la que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico, administrativo que pudiera ser útil para un competidor, y aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad.

Ahora bien, en el presente caso, contrario a lo que sostiene la Unidad de Enlace del IFT, la información solicitada no se encuentra vinculada con hechos y actos de carácter económicos utilizados por la empresa, que pudieran ser útiles para un competidor.

Así, se advierte que al tratarse de una causal de clasificación de información que de alguna manera podría atender aspectos económicos, los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal refieren precisamente para la actualización de este supuesto de confidencialidad, una condición sine qua non es que la información represente una ventaja competitiva para el particular frente a los demás agentes con la misma actividad en el mercado que se trate.

De hecho se advierte que la referida clasificación está supeditada a una condición, tal como lo refiere el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y que consistente no solo en que los particulares entreguen a las autoridades la información con el señalamiento de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

que la misma es confidencial, reservada o comercial, sino que además, deben tener el derecho de reservarse la información.

Al respecto, conviene destacar que Grupo Iusacell no tiene derecho a reservarse la información, pues dentro del marco jurídico se desprende diversos preceptos que establecen que la información solicitada es pública; tal como se desprende a continuación:

- *Separación Contable.* El artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014- y el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, establecen que los reportes anuales que presentan los concesionarios son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona;

- *Estados Financieros.*- El artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada, establece que toda sociedad anónima deberá hacer público sus estados financieros; y

- *Minutos Cursados.* La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local en relación a la fracción relación XXII del artículo 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el artículo 36 fracción II y demás relativos del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prevén que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.

Razón por la cual, atendiendo a los preceptos citados previamente, se obliga a los concesionarios -por tanto a Grupo Iusacell-, a entregar para su inscripción y publicidad en el Registro de Telecomunicaciones -e inclusive publicar en el Diario Oficial- la información relativa a minutos cursados, separación contable y estados financieros.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Lo anterior, en el entendido de que Grupo Iusacell como todos los concesionarios, en caso de incumplir con las obligaciones señaladas, serán sancionadas en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Pero más allá de esto, es decir, con independencia de las normas especiales citadas, existe un interés público respecto de la información solicitada, dado que el conocimiento de la misma contribuiría a valorar si Grupo Iusacell cumple con sus títulos de concesión.

Toda ello derivado de la utilización que el concesionario mantiene respecto de redes públicas de telecomunicaciones; rubro que, como se señaló con antelación, reviste un especial interés público.

Por tanto, se debe desestimar la posibilidad de considerar como confidencial la información solicitada entregada en una versión pública, con fundamento en el artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, revocarse la clasificación y reserva de información entregada.

En el mismo sentido, en igualdad de razón, se debe desestimar la posibilidad de considerar como confidencial la información solicitada, con fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el propio precepto establece en tercer párrafo lo siguiente.-

"(...)

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad."

(Énfasis añadido)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Así, tomando en consideración que el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de diciembre de 1998-; el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local; artículo 36 fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y; artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada, establecen que la información solicitada debe ser divulgada e inscrita en el Registro de Telecomunicaciones, es inconcuso que NO existe secreto industrial.

Cabe destacar que los anteriores argumentos medularmente han sido previamente sustentados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al resolver los expedientes 3933/09 3935/09.

Tercero.- Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información es de carácter público y no debe de reservarse o clasificarse de tal manera.

En primer término, debe destacarse que por regla general, conforme al artículo 6° de la Constitución Federal y los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda persona tiene garantizado, bajo el principio de máxima publicidad, el acceso a la información que esté en posesión de una autoridad.

Ahora bien, la propia legislación secundaria -Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental- establece en sus artículos 13 y 14, que el acceso a la información de ciertos documentos públicos puede ser limitado por la autoridad, siempre que se encuentren en dichos y exactos supuestos.

En el particular, es dable sostener que la información solicitada al IFT NO se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que establece Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que dicha

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

información es considerada por disposición de la ley como información abierta y pública.

De este modo, cada información y documentación solicitada, está dispuesta en una norma en la que se especifica que toda persona puede tener acceso a dicha información y consultarla sin restricción alguna, tal como se detalla a continuación:

- *Separación Contable.- El artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión-publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014- y el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los Concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, establecen que los reportes anuales que presentan los concesionarios son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona;*
- *Estados Financieros. El artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada, establece que toda sociedad anónima deberá hacer público sus estados financieros; y*
- *Minutos Cursados. La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local en relación a la fracción XXII del artículo 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el artículo 36 fracción II y demás relativos del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prevén que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.*

De este modo, atendiendo a una interpretación a contrario sensu de la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es inconcuso que toda la información que se solicitó por disposición de ley es pública y de libre acceso para toda persona.

Por consiguiente, no existe fundamento alguno que justifique la reserva hecha por la Unidad de Transparencia, máxime que, se reitera, es el propio marco jurídico el que ordena la publicidad y acceso a dicha información.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Cuarto.- Se pide se revoque la clasificación de que no obra en archivos del sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información es de carácter público y no debe clasificarse de tal manera.

En primer término, debe destacarse que por regla general, conforme al artículo 6° de la Constitución Federal y los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda persona tiene garantizado, bajo el principio de máxima publicidad, el acceso a la información que esté en posesión de una autoridad.

Ahora bien, la propia legislación secundaria -Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental- establece en sus artículos 13 y 14, que el acceso a la información de ciertos documentos públicos puede ser limitado por la autoridad, siempre que se encuentren en dichos y exactos supuestos.

En el particular, es dable sostener que la información solicitada al IFT NO se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que establece Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que dicha información es considerada por disposición de la ley como información abierta y pública.

De este modo, cada información y documentación solicitada, está dispuesta en una norma en la que se especifica que toda persona puede tener acceso a dicha información y consultarla sin restricción alguna, tal como se detalla a continuación:

• Separación Contable. El artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014- y el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, establecen que los reportes anuales que presentan los concesionarios son públicos y pueden ser consultados por cualquier personas;

• Estados Financieros.- El artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

materia de la información solicitada, establece que toda sociedad anónima deberá hacer público sus estados financieros; y

- *Minutos Cursados. La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local en relación a la fracción relación XXII del artículo 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el artículo 36 fracción II y demás relativos del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prevén que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.*

De este modo, atendiendo a una interpretación a contrario sensu de la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es inconcuso que toda la información que se solicitó por disposición de ley es pública y de libre acceso para toda persona.

Ahora bien, el fundamento y motivación referida por el sujeto obligado, es ilegal, toda vez que no demuestra con documentales lo siguiente:

"... con respecto a la manifestación efectuada por la Unidad de Cumplimiento en torno a la información que no obra en sus archivos, consistentes en:

- *Información solicitada de Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., del año 2005, ya que dicho operador inicio operaciones en 2006."*

Es de relevancia hacer notar, que toda vez que Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., no se encontraba obligada a presentar la información a la que se hace en los tres puntos que precede, toda vez que inició operaciones en el año 2006, no es necesario declarar formalmente la inexistencia, toda vez que le es aplicable el Criterio 07110, emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual refiere que "no será necesario que el comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia", como lo es en la especie"

(Énfasis añadido)



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Cabe señalar lo infundado de la manifestación anterior ya que no es apoyada con algún documento que acredite el supuesto inicio de operaciones de Iusacell PCS de México, S.A. de C.V. desde el año 2006 y que lo libere de la obligación de brindar la información solicitada, ante lo cual el sujeto obligado no fundamenta ni justifica su actuar máxime que, se reitera, es el propio marco jurídico el que ordena la publicidad y acceso a dicha información.

Quinto.- Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada, ya que éste incumplió lo dispuesto en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, establecen en forma clara y sucinta las obligaciones que deben observar los sujetos obligados para emitir versiones públicas, tal como se desprende los siguientes preceptos:

"Artículo 3. En los casos en que un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, la dependencia o entidad deberá elaborar una versión pública, omitiendo las partes o secciones clasificadas y señalando aquéllas que fueron omitidas, en términos del artículo 43 de la Ley, 30 y 41 de su Reglamento y el Séptimo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 4. La información pública de conformidad con el artículo 7 de la Ley, no podrá omitirse de las versiones públicas. Tampoco podrá omitirse el nombre de los servidores públicos en los documentos, ni sus firmas autógrafas.

Artículo 17.- Las concesiones, permisos o autorizaciones deberán considerarse públicas, independientemente de su vigencia.

Artículo 18.- Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse una versión pública de las concesiones, permisos o autorizaciones, en la que no podrá omitirse aquella información que acredite el cumplimiento de obligaciones previstas para la obtención, renovación o conservación de la concesión, permiso o autorización de que se trate, salvo aquella información que se encuentre

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

clasificada como confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley.

Las dependencias y entidades no podrán clasificar documentos que obren en fuentes de acceso público o registros públicos, ni podrán omitir datos que esos documentos publiciten, cuando los mismos hagan constar el cumplimiento por parte de los particulares, de requisitos necesarios para obtener o conservar una concesión, permiso o autorización.

(Énfasis añadido)

Es el caso que, de acuerdo a lo señalado por el sujeto obligado, en su oficio IFT/212/CGVI/UETAI/212/2014, de fecha, 4 de noviembre de 2014, refiere que la información solicitada será entregada mediante versiones públicas, situación que hace evidente su ilegal actuar, ya que el sujeto obligado NO atendió lo dispuesto en Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

De los artículos antes transcritos, específicamente el artículo 3 de los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se desprende que para que se elabore una versión pública, es porque en el documento o expediente contiene partes o secciones reservadas o confidenciales, ahora bien, tal y como ya fue expuesto en puntos que anteceden, la información solicitada a Grupo Iusacell, no debía clasificarse en información confidencial y reservada, por lo que bajo ese contexto, la autoridad no estaba facultada para elaborar una versión pública.

Aunado a lo anterior, es indudable que con fundamento en el artículo 18 de Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; la información solicitada no podían clasificarse pues la misma obra registros públicos, ni podía omitir datos que esos documentos publiciten, cuando los mismos hagan constar el cumplimiento por parte de los particulares, de requisitos necesarios para obtener o conservar una concesión, permiso o autorización.

Así, si tomamos en cuenta que el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones -publicada en el Diario Oficial de la Federación el

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

01 de diciembre de 1998-; el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local; artículo 36 fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y; artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada, establecen que la información solicitada debe ser divulgada e inscrita en el Registro de Telecomunicaciones, es inconcuso que NO se puede clasificar, más aun si de ella se desprende el cumplimiento de las obligaciones de los títulos de concesión de Grupo Iusacell.

En ese entendido y considerando que la información solicitada es una información pública, es por lo que hace evidente el ilegal actuar del sujeto obligado, ya que elabora una versión pública contraviniendo lo señalado en el artículo 4 y 17 de los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

V. La copia de la resolución que se impugna. - Se lista el documento que se adjunta a la presente:

1. Oficio IFT/212/CGVI/UETAI/212/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014 expedido por la Unidad de Enlace.

Por lo expuesto, ante esta Instancia Revisora, atentamente pido:

Primero.- Tener por presentado, por mis propios derechos, el presente recurso solicitando lo que en él se desprende.

Segundo.- Admitir el recurso a trámite.

Tercero.- En términos del artículo 52 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, subsanar cualquier deficiencia del presente recurso interpuesto.

Cuarto.- Revocar la indebida clasificación y reserva realizada por la Unidad de Enlace del Instituto y conceder acceso pleno a la información solicitada.

(...)



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

IV. El 12 de diciembre de 2014, la Unidad de Cumplimiento remitió, mediante oficio IFT/225/UC/519/2014, información adicional y/o alegatos como sigue:

"(...)

1.- La recurrente solicita en su petitorio PRIMERO:

"...se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada, entregada en una versión pública ya que dicha información, contrario a lo que sostiene éste, es pública por disposición del ordenamiento jurídico." (El resaltado es propio)

En ese sentido, efectivamente Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V. son concesionarias de una Red Pública de Telecomunicaciones, sin embargo, la información que respecto de éstas se solicita no es información de carácter público pues ningún ordenamiento jurídico aplicable a Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., en su carácter de concesionarias así lo establece.

La información entregada por los concesionarios en cumplimiento a la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas del Servicio Local consiste en:

La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o troncales de conmutador, que existan al término del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

La cantidad total de troncales de interconexión asignada a cada central local, desglosada por tipo, capacidad y concesionario interconectado;



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Las solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo."

Es información que reviste el carácter de CONFIDENCIAL en términos del artículo 18 y 19 de la LFTAIPG, de numeral TRIGÉSIMO SEXTO de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, por ser relativa al patrimonio de los concesionarios, toda vez que contiene información que comprende hechos de carácter técnico de su red.

Ahora bien, la información que se contiene en dicha regla, referente a los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, reviste el carácter de RESERVADA de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 14 fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 5 y 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, toda vez que corresponde a datos e informes administrativos relativos a la operación de su red y los mismos son usados por este Instituto como insumo para generar las estadísticas del sector de telecomunicaciones.

El artículo 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece:

"Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él.

Cuando se deba divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identificar a los Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

El Instituto expedirá las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la Información, con apego a lo dispuesto en este artículo”.

En ese sentido, dicha información corresponde a datos e informes administrativos relativos a la operación de su red y los mismos son usados por este Instituto también para fines estadísticos, pues son insumo para generar las estadísticas del sector de telecomunicaciones, por lo que éstos deben ser manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, sin que se puedan divulgar en ningún caso en forma nominativa o individualizada.

De ahí que se reitere que la información no puede ser divulgada por el Instituto, considerando también el impedimento legal establecido en el artículo 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Respecto a la información relativa a los reportes anuales de separación contable, dicha información reviste el carácter de CONFIDENCIAL, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, toda vez que estos representan de forma estructurada la situación y desarrollo o desempeño financiero de una entidad dentro de un periodo concluido, en específico de ciertas cuentas de ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados.

Finalmente, con relación a los estados financieros, estos tiene el carácter de CONFIDENCIAL de conformidad con los artículos 18 y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, toda vez que representan de una forma estructurada la situación y desarrollo o desempeño financiero de una entidad dentro de un periodo concluido.

A mayor abundamiento, es importante destacar que las personas jurídicas colectivas, también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

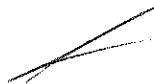
Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido.

De todo lo anterior, se advierte que la información debe ser considerada CONFIDENCIAL, toda vez que la información que integran los reportes de separación contable y estados financieros, es netamente información relativa al patrimonio de las personas morales misma que tiene el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información

9/11/14



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.”.

2.-Con respecto a la solicitud de la recurrente en su petitorio SEGUNDO, consistente en:

“...Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información, contrario a lo que sostiene éste, no es información reservada y debe de obrar en el Registro de Telecomunicaciones.”

Sin emitir un pronunciamiento con relación a si la información obra o no, en el Registro Público de Telecomunicaciones, resulta importante manifestar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone:

Artículo 176. El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones aplicables que se emitan.

Artículo 178. ...

...

La información contenida en el Registro Público de Concesiones es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se considere de carácter confidencial o reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

...

...”

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

De lo anterior, se desprende que la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que la información que obre en el Registro de Telecomunicaciones puede ser consultada por el público en general, salvo aquélla que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial o reservada.

Es importante destacar que la recurrente erróneamente considera que la información referente a los minutos de tráfico que Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., presentan a este Instituto, en los Informes trimestrales que elaboran en términos y/o con la información a que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas de Servicio Local, es pública, atendiendo a que la Regla Cuadragésima Segunda de la Reglas del Servicio Local, señala que debe constar en el "Registro de Telecomunicaciones" y que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dicho registro puede ser consultado por el público en general.

En primera instancia, es importante precisar que si bien la regla Cuadragésima Segunda de la Reglas del Servicio Local, disponen en su último párrafo que la información deberá ser inscrita en el "Registro de Telecomunicaciones", se debe atender que dicha regla no señala expresamente la clasificación bajo la cual debe ser inscrita, de ahí que cabe apuntar que no por estar inscrita en el Registro de Telecomunicaciones ésta deba ser considerada como pública, como lo establece el referido artículo 178 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por lo anterior, sin pronunciarse sobre la existencia de la información en el Registro de Telecomunicaciones, se advierte que la información que se enlista en dicha Regla, es información que guarda el carácter de RESERVADA o CONFIDENCIAL, como ha quedado descrito anteriormente.

3.- Ahora bien, en lo que respecta al petitorio TERCERO, en el que la recurrente solicita:

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

"Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información es de carácter público y no debe de reservarse o clasificarse de tal manera."

Lo anterior, según manifiesta el recurrente, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que establece Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que dicha información es considerada por disposición de la ley como información abierta y pública".

Se reitera la clasificación de la información que nos ocupa, en atención a lo manifestado para dar respuesta al petitorio PRIMERO.

4.- Por lo que respecta al petitorio CUARTO en donde la recurrente señala:

"Se pide se revoque la clasificación de que no obra en archivos del sujeto obligado respecto de la información solicitada en la versión pública, ya que dicha información es de carácter público y no debe clasificarse de tal manera."

Para lo cual manifiesta que el fundamento y motivación referida es ilegal, toda vez que no se demuestra con documentales que la Información solicitada de Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., del año 2005, no obra en los archivos de la Unidad de Cumplimiento, ya que dicho operador inicio operaciones en 2006.

En ese sentido, se anexa al presente escrito copia simple de lo siguiente:

- Escrito de 17 de abril de 2006, en el que Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., presenta información para dar cumplimiento al numeral A.5 del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de Telecomunicaciones correspondiente al periodo de enero a marzo de 2006, por que informan que dicha empresa inició la explotación comercial de su Red para las regiones PCS 2 y 3 el 27 de abril de 2005.*
- Escrito de 17 de abril de 2008, en el que Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., notifica el inicio de la explotación comercial de su Red, para las regiones PCS 5,*

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

6,7, 8 y 9, respecto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de Telecomunicaciones que se le otorgó el 27 de abril de 2005.

De dicha información no fue necesario declarar la inexistencia pues como quedó establecido, no existía obligación de los concesionarios de presentarla, por lo que de conformidad con el criterio 07-10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no fue necesario declarar su inexistencia, pues no se desprende obligación de contar con ella.

5.- Finalmente, por lo que toca al petitorio QUINTO, en el que la recurrente expresa:

"Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada, ya que éste incumplió lo dispuesto en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

La Unidad de Cumplimiento, para la elaboración de las versiones públicas de que se trata, contrario a lo manifestado por el recurrente, tomó en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 30 segundo párrafo de su reglamento así como Séptimo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2003.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece:

"Artículo 43...

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas."

2014



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone:

Artículo 70.-...

...

IV. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que contenga partes o secciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir al Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, así como la reproducción de una versión pública de los documentos que no estén clasificados o en los que se hayan omitido las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los expedientes o documentos clasificados. En su caso, el Comité procederá conforme lo establece el artículo 41 de este Reglamento y emitirá una resolución fundada y motivada, y

En este sentido, esta Unidad envió al Comité de Información de este Instituto, las versiones públicas y el oficio en el que se indicó las partes o secciones que de la información que se testaron, por contener información reservada o confidencial, en los que igualmente se incluyó la fundamentación y motivación para ello.

(...)”

V. El 19 de febrero de 2015, durante la III Sesión del Consejo de Transparencia, los integrantes del mismo mediante acuerdo número CTIFT/190215/7, aprobaron ampliar el plazo de resolución del recurso, con la finalidad de que se llevaran a cabo las audiencias con el recurrente, la Unidad de Cumplimiento, el Comité de Información y los representantes legales de las empresas titulares de la información solicitada (Grupo Iusacell).

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

VI. Con fecha 06 de marzo de 2015, el Comité de Información del Instituto, presentó escrito con diversas manifestaciones, para que el Consejo de Transparencia contara con más elementos para dictar la resolución que conforme a derecho corresponda, siendo las siguientes:

"(...)

Hacemos referencia a sus oficios IFT/100/PLENO/STP/556/2015 e IFT/100/PLENO/STP/557/2015 ambos fechados el 27 de febrero de 2015, mediante los cuales solicitó al Comité de Información de este Instituto para que compareciera a las audiencias del Consejo de Transparencia, próximas a celebrarse el 9 de marzo de 2015 a las 11:00 y 12:30 horas, respectivamente, con la finalidad de que dicho órgano garante cuente con elementos para dictar la resolución correspondiente a los recursos de revisión con números de folio 20144006150 y 20144006150, mismos que están siendo sustanciados por ese H. Consejo, y que se derivaron de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información 0912100049914 y 0912100050014.

En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, tercer párrafo, fracción VI del Acuerdo de Carácter General mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide las reglas de organización y funcionamiento de su Consejo de Transparencia, así como los procedimientos para la presentación y sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración a los que hace referencia el artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este órgano colegiado emite las siguientes manifestaciones:

PRIMERO.- Las solicitudes de información 0912100049914 y 0912100050014, fueron atendidas en la XIX Sesión Ordinaria 2014 del Comité de Información, del 31 de octubre de 2014, tomando en consideración todos los elementos de hecho y de derecho con los que se contaba, tal como se hizo constar en el acta respectiva y que obra para consulta en la liga http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/01/ACTA_XIX_S_ORDINARIA_2014.pdf.

Por tanto, al no tener manifestaciones adicionales que formular respecto de la atención de dichas solicitudes de información, en el presente acto,

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

respetuosamente, se ratifican los considerandos y resolutivos contenidos en el acta de mérito, pues en ella se consignaron de manera fundada y motivada las determinaciones de este Órgano Colegiado. (Documento que se anexa para pronta referencia).

SEGUNDO.- Por lo que hace a los recursos de revisión que nos ocupan y que versan precisamente respecto de las respuestas emitidas por este Órgano Colegiado, se destaca que de conformidad con los registros de la Unidad de Enlace, a la fecha del presente, el recurrente a pesar de haber efectuado el pago respectivo para estar en posibilidades de recoger la información en cuestión, aún no ha acudido por ella, por tanto, la manifestación de que la misma se encuentra incompleta, resulta unilateral y subjetiva, pues se reitera, no se conoce cabalmente el contenido de la misma, por ende no se está en posibilidades de calificarla. Para una mejor exposición del argumento, resulta conducente transcribir la dolencia:

"(,. .) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49, 50, 57, 52, 54, 55 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se interpone RECURSO DE REVISIÓN, en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, ya que se considera que la información entregada, en virtud de la solicitud de información, es incompleta, así como que se omitieron partes o secciones clasificadas que son por disposición legal, información pública; asimismo se reclama en el presente recurso la indebida clasificación que realizó tanto la Unidad de Enlace como el Comité de Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones(, ..)"

Por lo expuesto y fundado en el presente ocurso, le solicitamos a Usted, C. Secretario de Acuerdos, en atención a lo dispuesto por el artículo 12, tercer párrafo, fracción VI, del ACUERDO de Carácter General mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide las reglas de organización y funcionamiento de su Consejo de Transparencia, así como los procedimientos para la presentación y sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración a los que hace referencia el artículo 6 7 fracciones V y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tenga por presentadas las manifestaciones del Comité de Información.

(...)



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

VII. El 9 de marzo de 2015 se llevaron a cabo las audiencias señaladas en el numeral anterior, cabe mencionar que el recurrente no se presentó a la audiencia que se tenía prevista, por lo que hace a la audiencia celebrada con la Unidad de Cumplimiento, el Comité de Información y los representantes de Grupo Iusacell, se levantó el acta correspondiente y se realizó la versión estenográfica de la misma, las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen.

Al respecto, cabe señalar que previo a la celebración de la audiencia, la representación de Grupo Iusacell hizo llegar al Consejo de Transparencia un escrito que contiene sus manifestaciones en relación con el recurso de revisión, como sigue:

"(...)

Mediante oficio número IFT/100/PLENO/STP/445/2015 de 24 de febrero de 2015, el C. Consejero y Secretario de acuerdos del Consejo de Transparencia de ese Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante "IFT"), con relación al Recurso de Revisión citado al rubro, otorgó a mis representadas plazo para aportar pruebas y/o elementos adicionales al procedimiento. En atención a ello, a continuación se realizan las manifestaciones de derecho correspondientes a fin de acreditar lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente.

Antes de verter las consideraciones de derecho mencionadas se hacen valer las siguientes:

CUESTIONES PRELIMINARES

I.- Improcedencia del recurso de revisión promovido por la recurrente.

El recurso de revisión respecto del cual se da vista a Grupo Iusacell a fin de que manifieste lo que su derecho convenga resulta improcedente, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo noveno, fracción

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece textualmente lo siguiente:

"Artículo 28.-

(...)

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

(...)"

De la disposición constitucional antes transcrita se desprende que en contra de todos los actos del IFT -sin establecerse distinción alguna respecto a alguno de los órganos que lo componen- podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto.

Esta disposición fue producto de la reforma constitucional llevada a cabo en términos del "DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" (en adelante el Decreto Constitucional") publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

de junio de 2013, entrando en vigor al día siguiente de su publicación conforme a su artículo Primero Transitorio, esto es el día 12 del mismo mes y año.

Es el caso que el acto que la recurrente pretende impugnar es el oficio número IFT/212/CGVI/UETA/212/2014 de fecha 4 de noviembre de 2014 emitido por la Unidad de Enlace del IFT en respuesta a la solicitud de acceso a la información número 0912100050014, sin embargo en contra de dicha resolución, conforme a la disposición constitucional anteriormente citada, únicamente procede amparo indirecto y no así el recurso de revisión que la recurrente intentó.

No pasa inadvertido para Grupo Iusacell el contenido del "Acuerdo de Carácter General mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide las reglas de organización y funcionamiento de su Consejo de Transparencia, así como los procedimientos para la presentación y substanciación de los recursos de revisión y reconsideración a los que hace referencia el artículo 61, fracciones V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental" (en adelante el "Acuerdo del Consejo de Transparencia") publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2013, en el cual, como su nombre lo indica, se establecen las reglas de funcionamiento del Consejo de Transparencia del IFT y se establece la posibilidad de que los solicitantes de información al mismo promuevan recurso de revisión en contra de la respuesta a tal solicitud en materia de acceso a la información o datos personales.

Este Acuerdo del Consejo de Transparencia fue emitido con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante "LTAIPG") y 35 del Estatuto Orgánico del IFT (en adelante el "Estatuto Orgánico") este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de septiembre de 2013, los cuales son del tenor literal siguiente:

Calli

"Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.

*Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda:
(...)*

*V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Artículo 60;
(...)*

VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las demás facultades que le otorga este ordenamiento."

"Artículo 35. El Instituto contará con un Consejo de Transparencia facultado para resolver, en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables, los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que emita el Comité de Información.

Dicho Consejo estará integrado por un servidor público designado por el Pleno, el Secretario Técnico del Pleno, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Titular de la Contraloría Interna."

El artículo 61, fracción V y VII de la LTAIPG entró en vigor el día 12 de junio de 2002, que es el que facultaba a los órganos constitucionalmente autónomos, a expedir las disposiciones en las que se contemplara la posibilidad e combatir a través de un recurso de revisión las resoluciones y/o decisiones en materia de acceso a la información.

Sin embargo, si bien en términos de dicho artículo, se contemplaba la posibilidad de que los organismos constitucionalmente autónomos -como lo es ese IFT- emitan disposiciones en las que se prevea el procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Artículo 60 de la LFTAIPG, también es cierto que el contenido del artículo 28, párrafo décimo noveno, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entró en vigor el día 12 de junio de 2013, esto es con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 61, fracciones V y VII de la LTAIPG.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Esto es, la obligación o restricción constitucional, consistente en que las resoluciones del IFT únicamente pueden ser combatidas a través del juicio de amparo, entró en vigor con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 61, fracciones V y VII de la LFTAIPG que permitía el que las decisiones en materia de transparencia de los organismos constitucionalmente autónomos, fueran combatidas mediante un recurso de revisión.

Con la entrada en vigor del artículo 28, párrafo décimo noveno, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que no hace distinción alguna en cuanto al tipo de resolución de que se trate ni mucho menos del órgano del IFT que la emita, evidentemente que atendiendo a la jerarquía normativa que se desprende del artículo 133 de la Constitución federal y al principio general de derecho de que "ley posterior deroga a la ley anterior" - máxime si la ley posterior es de rango constitucional- operó una derogación tácita del artículo 61, fracciones V y VII de la LFTAIPG, y por ende, el recurso de revisión de la promovente resulta improcedente ya que en contra de la resolución recurrida únicamente procedía el juicio de amparo indirecto, razón por la cual lo procedente en el presente asunto es que se emita resolución en la que se deseche el recurso de revisión del que se dio vista a Grupo Iusacell.

II.- Consideraciones en torno al derecho a la privacidad del que goza Grupo Iusacell y a los criterios internacionales que refiere el solicitante.

Mediante oficio citado al rubro, mis representadas tuvieron conocimiento de la solicitud de acceso a la información 0912100050014, relativa a diversos datos de Grupo Iusacell consistentes en:

Estados Financieros auditados de Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Informes trimestrales que Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., hayan presentado en términos y/o con la información que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las reglas de Servicio Local, en donde informa los minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen, con respecto al tráfico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

Otros datos para facilitar su localización

Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., exhibieron los documentos solicitados para conocimiento de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones en cumplimiento de sus títulos de concesión y de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y diversa regulación aplicable en la materia, por lo que dicha documentación obra en los archivos y registros del Instituto Federal de Telecomunicaciones. (sic)

Con relación a lo anterior, mis representadas realizan las siguientes manifestaciones con el objetivo de demostrar y robustecer los argumentos de la resolución emitida el pasado 4 de noviembre de 2014 por el Instituto, misma que fue dictada conforme a derecho y atendiendo al principio de transparencia y máxima publicidad, así como respetando el derecho a la vida privada de las empresas.

I. El derecho de acceso a la información del recurrente se encuentra constitucionalmente restringido por el derecho a la vida privada de Grupo Iusacell.

El solicitante inicia su recurso mediante un apartado que refiere a los Derechos Humanos y el Principio Pro Personae que se contiene en el artículo 1º constitucional

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014
Folio del Recurso de Revisión: 2014006150
Expediente: 31/14

del cual se desprende la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad y progresividad.

Al efecto, el recurrente alude a un reciente criterio judicial que desarrolla el contenido de los principios aludidos en el párrafo anterior, tesis que es del tenor literal siguiente:

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN.

El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la "Masacre de Mapiripán vs Colombia") ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los estados de excepción se "suspenden", pues en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse,

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.¹

La tesis citada desarrolla el contenido de los principios aludidos, y en específico, con relación al principio de **universalidad**, apunta que los derechos humanos son inherentes a todos y que son inviolables, sin embargo, precisamente por concernir a todas las personas, no son absolutos, sino que se adecuan razonablemente a las circunstancias y, precisamente, esa flexibilidad, les da el carácter de universal.

Con relación al principio de **interdependencia e indivisibilidad**, precisa que los derechos están relacionados entre sí, lo cual implica que las acciones relacionadas con uno tienen un impacto sobre los otros y que no se puede hacer separación entre ellos, partiendo del supuesto que unos son más importantes que otros. En este tenor en la interpretación que se lleve a cabo en materia de derechos humanos debe procurarse su maximización, aunque en algunas ocasiones en diferente grado, por la presencia de otro derecho humano que también deba respetarse y resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor a la persona.

Lo anterior se robustece mediante el criterio jurisprudencial también citado por el recurrente que señala los criterios de optimización interpretativa de los derechos humanos en los términos siguientes:

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL REPRESENTAN

¹ (TA), TCC, Décima Época, Instancia, SJF, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Página: 2254, Tesis: I.4o.A.9 K (10a.)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); **además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente** (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.²

En virtud de lo anterior, desde la inclusión del principio pro personae y de la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011, las autoridades están obligadas a dictar sus actos de acuerdo a la norma más amplia o

² (TA), TCC, Décima Época, SJF, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Página: 1289, Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer y proteger derechos humanos, es decir, el sentido más proteccionista en favor de la persona.

Sin embargo, existen derechos que pueden ser restringidos frente a los derechos de los demás, no obstante dicha restricción no puede ocasionar un daño mayor a quien se restringe, frente al beneficio otorgado a la otra persona, por lo que debe atenderse a la universalidad de los derechos y resolver conforme a las circunstancias del caso concreto.

Además, cuando existen dos derechos humanos en conflicto cuya titularidad corresponde a dos personas distintas, debe realizarse una ponderación -en los términos que se exponen más adelante- y atender al derecho (i) que proteja de manera más amplia a la persona, (ii) que cause el menor daño y (iii) que otorgue el mayor beneficio. Es decir, que de ser necesario preferir la protección de cierto derecho, el daño a la otra persona no resulte desproporcional con el beneficio otorgado.

No obstante lo anterior, no debe pasar desapercibido para este Instituto que nuestro Máximo Tribunal, ya se pronunció con relación a las restricciones que nuestra Constitución impone a los derechos humanos tutelados en los diversos Tratados Internacionales. El criterio se encuentra sustentado en la siguiente Jurisprudencia:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., **cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional**, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.³

La Jurisprudencia transcrita establece que a partir de la reforma constitucional de 2011, de acuerdo con el artículo primero 1° Constitucional, todos los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos, al formar parte del derecho positivo de nuestro país, deben ser respetados y aplicados por las autoridades -administrativas, legislativas y judiciales- en favor de la persona. Sin embargo, al tratarse de una restricción prevista en la Constitución a un derecho humano, en atención al principio de supremacía constitucional debe prevalecer lo dispuesto en nuestra norma fundamental sobre lo previsto por los tratados internacionales.

En el caso concreto, el recurrente solicitó al órgano el acceso a la información y la publicidad de datos de mis representadas, tales como sus estados financieros, reportes contables e informes sobre sus actividades, cuyo contenido fue exhibido ante esta autoridad -en su anterior denominación- con el carácter de información confidencial y reservada, atendiendo al derecho humano a la vida privada del cual es titular Grupo Iusacell.

Ahora bien, el recurrente pretende fundar su solicitud con base en su derecho de acceso a la información y principios de transparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 6° Constitucional al tenor literal siguiente:

³ (J), Pleno, Décima Época, SJF, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1, Pág. 202, Tesis P/J. 20/2014 (10°).

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

"Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

*II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.
(...)"*

En términos del artículo transcrito, existe una restricción al derecho de acceso a la información que se actualiza cuando ésta se refiera a la vida privada de las personas y a la protección de sus datos personales. En ese sentido, como adecuadamente lo determinó la Unidad de Cumplimiento del Instituto, los estados

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

financieros, reportes contables e informes sobre las actividades de Grupo Iusacell, es información que de ser publicada u otorgada a terceros ajenos a mis representadas se estaría vulnerando su derecho a la vida privada y a la protección de sus datos personales en los términos que más adelante se exponen.

Por lo anterior, lo conducente es que atendiendo a la restricción constitucional al derecho de acceso a la información en virtud del derecho a la vida privada que gozan mis representadas, el Pleno del Instituto confirme la negativa dictada mediante resolución el pasado 4 de noviembre de 2014.

Ahora bien, sin perjuicio de que más adelante se abundará sobre este argumento, suponiendo sin conceder que se considerara que el solicitante tiene un derecho de acceso a la información solicitada, la ponderación que realice el órgano entre el derecho de acceso a la información del solicitante/recurrente y el derecho a la vida privada y protección de datos personales de Grupo Iusacell, debe restringirse aquél y otorgarle la protección más amplia a los derechos de mis representadas, en virtud de que el recurrente no acredita un mayor beneficio que el daño que se le ocasionaría a Grupo Iusacell con la publicación de los datos solicitados.

En ese sentido, como se demostrará en seguida, atendiendo a la prevalencia del derecho a la vida privada y protección de datos de mis representadas, la información solicitada debe seguir dotada del carácter de confidencial y reservada.

ii. Inaplicabilidad de los criterios internacionales que refiere el solicitante.

El recurrente pretende hacer valer la aplicación de fuentes del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, consistentes en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos que desarrollan el derecho a la verdad contenido en los artículos 8 y 25 y, excepcionalmente, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, como se desarrolló en el apartado anterior, es importante señalar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben subordinarse la Constitución cuando no se alinean a la restricción -en el caso-

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

prevista en el artículo 6° constitucional, en relación al derecho a la vida privada y protección de datos personales frente al derecho de acceso a la información.

Por otro lado, las sentencias citadas por el recurrente no son aplicables al caso concreto en virtud de lo siguiente:

1. Caso Gomes Lund vs. Brasil.- La sentencia que resolvió el presente caso contencioso se refiere al derecho a la verdad que tienen los familiares de una persona víctima de desaparición forzada, en virtud de la información en poder de las autoridades y la negativa a proporcionarla. No puede utilizarse en este caso ya que el derecho a la verdad tiene un ámbito de regulación específico y con una protección robustecida por el contexto de donde emana, distinto del acceso a la información. Aunado a lo anterior, en estos casos es incuestionable la titularidad del derecho de los familiares de reconocer la verdad sobre casos de desaparición forzada, siendo el caso que aquí no existe un derecho a priori a conocer la información privada de las empresas.

2. Caso López Álvarez vs. Honduras.- Este precedente se refiere a la violación al derecho a la libertad de expresión en virtud de que las autoridades no permitían a las víctimas hablar su idioma materno. Es un caso de discriminación con relación al derecho de libertad de expresión que nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información.

3. Opinión consultiva. 5/85 "La colegiación obligatoria de periodistas".- No es aplicable toda vez que en los párrafos que cita el recurrente, la Corte Interamericana realiza un análisis sobre el derecho a la libertad de expresión en un doble sentido, por un lado el derecho a expresar opiniones e ideas y por otro lado, el derecho a recibirlas. Nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información en poder del Estado.

Finalmente, el único caso que podría ser aplicable por su contexto a la especie, es la sentencia que resolvió el Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sin embargo como se demostrará en estas líneas el precedente beneficia los intereses de mis representadas, ya que ahí la Corte Interamericana se pronuncia respecto al derecho de acceso a la información considerando que éste se encuentra subordinado al control del Estado, quien puede restringir dicho acceso con el fin

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

de asegurar el derecho a la vida privada, la reputación y la protección de los datos personales de los demás, restricción que se encuentra permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se encuentra prevista en el artículo 6° de la Constitución Federal.

iii. Las personas morales -Grupo Iusacell- gozan y son titulares del derecho humano a la vida privada⁴.

Siguiendo la línea de lo expuesto en los apartados anteriores, el si bien, cuando el artículo 1° de la Constitución alude a "persona", se entiende en principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y su dignidad intrínseca, sin embargo, ello no significa que éstas no gocen del reconocimiento y, por ende, la garantía de protección, de ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior es así porque, en primer lugar, dicho numeral 1° no distingue expresamente entre persona natural y persona jurídica; en segundo lugar, como se ha aceptado en derecho comparado, las personas morales gozan de la protección de ciertos derechos humanos;⁵ en razón de que, constitucional y legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones y/o deberes que, indefectiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, como el de propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, etcétera. Es decir, las personas colectivas, tienen por sí mismas, la titularidad de determinados derechos humanos, más allá de las personas físicas que las crearon o las conforman.⁶

⁴ El presente apartado tiene como fuente principal la ejecutoria de la contradicción de tesis número 56/2011 entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁵ CoIDH. Caso Cantos vs Argentina, sentencia de 7 de septiembre de 2001, Excepciones Preliminares. TEDH. Caso Pine Valley Developments Ltd. And Others vs Ireland. Asimismo, existen en la actualidad instrumentos normativos que expresamente reconocen dicha titularidad y protección, como el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, Alemania, artículo 1 del Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, o el artículo 12 de la Constitución de Portugal.

⁶ GÓMEZ Montoro, Angel J. "La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas (análisis de la jurisprudencia del tribunal constitucional español)" en Cuestiones Constitucionales No. 2, enero-junio 2000.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Sobre esta línea argumentativa, se afirma que el vocablo persona que alude el artículo 1° constitucional debe interpretarse en sentido amplio, esto es, que en principio su protección alcanza también a las personas morales.

Ahora bien, sobre la titularidad del derecho humano a la vida privada, su protección se extiende sobre la esfera privada, interna, íntima de una persona, que en lo que a las personas morales se refiere, el derecho se aterriza en determinada información privada o confidencial a la que se le debe otorgar la protección constitucional frente a la intromisión de terceros, como veremos más adelante.

El principio de privacidad del que son titulares las personas morales estriba en que determinada información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, que se refiera a la vida privada y a los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Así pues, si bien el artículo 6° constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, como se expresó anteriormente, no es absoluto, siendo el propio precepto el que contempla las limitantes al mismo. Por lo que el principio de máxima publicidad no crea en automático un derecho irrestricto de apertura a cualquier tipo de información, sino que la autoridad correspondiente deberá considerar aquellas restricciones en cada caso concreto.

En ese sentido, deberá distinguirse entre aquella información que puede reservarse temporalmente en aras de un interés público, de aquella otra información que, por corresponder a la vida privada y a los datos personales, debe estar protegida por la ley, supuesto en el que de ninguna manera se trata de una reserva temporal de información, sino que siempre guarda su carácter confidencial y, por ende, sólo podrá ser divulgado con el consentimiento del particular.

Vinculado con esta limitante, está lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que expresamente reconoce el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de éstos-, salvo

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

en los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege en particular la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales.

Asimismo, debemos tener en cuenta la LFTAIPG que desarrolla el mandato contenido en el propio artículo 6° constitucional y, al efecto, regula en el ámbito federal el acceso a la información pública y que establece en sus artículos 13, 14 y 18 dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse: i) información confidencial e (ii) información reservada.

Conforme a dichos numerales, se considera como información confidencial aquella que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, a fin de proteger la vida privada y los datos personales como límites constitucionalmente legítimos y cuya protección no es temporal; sin embargo, podrá divulgarse tal información, si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la misma (artículo 21 de la misma Ley).

Asimismo, en aras de proteger el interés público, como límite constitucionalmente válido para restringir el acceso a la información pública, los artículos 13 y 14 de la citada Ley Federal establecen los casos en que la información es reservada. Previendo en el primero de los artículos citados un catálogo genérico de causas, mientras que el numeral 14 contiene un catálogo específico de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada. Respecto de éstas últimas, el penúltimo párrafo del artículo 14 dispone que cuando concluya el periodo de reserva o las causas que dieron origen a la misma, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

caillit

Aunado a ello, el artículo 15 de la misma ley, prevé que la información que sea clasificada como reservada conforme a los mencionados numerales 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años.

Resta señalar que el artículo 16, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, prevé un derecho de seguridad jurídica consistente en que nadie podrá



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

ser molestado, entre otros aspectos, en su propia persona, en sus papeles o en sus posesiones, sino sólo cuando medie mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado; lo que implica un reconocimiento del derecho de la persona -física y moral- al respeto a su vida privada, que la protege de intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ámbitos reservados; asimismo, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción.

Los rasgos característicos de la noción de lo "privado", como derecho estrechamente vinculado con la naturaleza de la persona, se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública; b) el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

Bajo esta perspectiva, si bien en el caso de personas morales, en principio, no podemos hablar de "vida privada", como aquel espacio íntimo y/o interno del ser humano, lo cierto es que las personas morales, como tales, sí cuentan con determinados espacios, como su domicilio y sus comunicaciones, o bien, con ciertos datos económicos, comerciales o inherentes a su identidad que están protegidos frente a intromisiones ilegítimas; por tanto, podemos afirmar que los bienes que tutelan o protegen los derechos a la intimidad o privacidad y de protección de datos personales, en sentido amplio, pueden comprender, en tanto no se aleja ni se opone a esa tutela, a aquellos documentos e información de las personas jurídicas colectivas que escapan al conocimiento de terceros.

De lo expuesto es claro que lo dispuesto en los artículos 6º, fracción I y II, y 16 segundo párrafo, constitucionales, puede extenderse o adscribirse a información de las personas morales que sin duda cuentan con un espacio que debe ser protegido constitucionalmente frente a terceros.

En ese sentido, debe concluirse que, conforme al artículo 6º constitucional, el principio recto en el orden jurídico mexicano en materia de transparencia e información pública es el de máxima publicidad y disponibilidad y, por ende, toda

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

la información que tengan las autoridades es pública, con independencia de la fuente de la que provenga o la forma en que la haya obtenido; sin embargo, de acuerdo también con el propio numeral 6º, relacionado con el 16, párrafo segundo, tratándose de aquella información que las personas morales o jurídicas entreguen a la autoridad con carácter de confidencial, podrá negarse su acceso público cuando tal documentación sea de índole privado, por contener datos que, de alguna manera, podrían equipararse a los personales y/o privados, o bien, se actualice alguno de los supuestos que prevean las leyes para la reserva temporal.

Robustece lo anterior el siguiente criterio judicial dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6º., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a

GALT



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.⁷

Expuesto lo anterior, a continuación se dará contestación a los agravios formulados por la recurrente, con lo cual se demostrará que fue adecuada negativa formulada por el Instituto de entregar información relativa a la separación contable, estados financieros y minutos cursados en las redes de mis representadas, habida cuenta que la misma se encuentra protegida -de manera destacada- por los artículos 6° de la Constitución Federal, 82 de la Ley de Propiedad Industrial y el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración (Los Lineamientos).

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS

PRIMERO.- En razón de que los agravios de la recurrente siguen una misma línea argumentativa, se dará refutación a los mismos de manera conjunta en la presente consideración de derecho, separando los argumentos en razón de la información solicitada.

1.- Separación contable.

En relación a la información que la recurrente solicita de mis representadas relativas a la separación contable a que refiere el artículo 292 de la LFTR, se manifiesta que dicho dispositivo no puede servir de fundamento y con ello pretender exigir la información por ella solicitada.

Como podrá advertir ese IFT, la información que solicita la recurrente es aquella correspondiente al periodo de los años 2005 al 2011, sin embargo, el artículo 292 de la LFTR que pretende utilizar la recurrente entró en vigor hasta el 14 de agosto del 2014, esto es, con posterioridad a los periodos cuya información solicita.

En otras palabras, en la época en la que se generó la información que pretende obtener la recurrente, no existía la obligación de contar con la misma en los

⁷ (TA), Pleno, Décima época, SJF, Época: Décima Época; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: P. 11/2014 (10a.)

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

términos establecidos en el artículo 292 de la LFTR, por lo que en este sentido resulta infundada la pretensión de la recurrente.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que fuera aplicable el citado dispositivo legal, el mismo tampoco puede servir de fundamento para acceder a la información pretendida por la recurrente.

Al respecto, el artículo 292 de la LFTR establece lo siguiente:

Artículo 292. Los concesionarios y las personas que cuenten con una autorización, cuando les sea aplicable, deberán proporcionar, asistir y facilitar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, para cada una de las concesiones o autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la información que se les requiera en cualquier momento para el cumplimiento de las funciones del Instituto.

Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al Instituto, toda la información relativa a la topología de sus redes, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos que las conforman, así como toda aquella que le permita al Instituto conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto cualquier información para integrar el acervo estadístico del sector, sin perjuicio de las facultades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La información a que se refiere el presente artículo, se deberá presentar de acuerdo a la metodología, formato y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto.

Si bien es cierto en términos del dispositivo en comento se establece que los concesionarios deberán facilitar determinada información contable al IFT cuando éste se los requiera, también lo es que de dicho numeral no se desprende que dicha información sea pública y por tanto accesible al público en general, máxime si se toma en cuenta que la información proporcionada por las sociedades que represento fueron entregadas al IFT con el carácter de confidencial, por lo que en este sentido la misma no puede ser divulgada.

Por otra parte y en relación a los fundamentos también citados por la recurrente consistentes en el "Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones" y el "Manual de la Metodología de Separación Contable por Servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones", los mismos tampoco resultan aplicables en la especie para pretender tener acceso a la información solicitada.

Como es del conocimiento de ese IFT, las sociedades que represento cuentan con una autorización expresa por parte de ese IFT para la NO APLICACIÓN de dichos fundamentos legales, por lo que en este sentido, los mismos no pueden ser utilizados para obtener la información pretendida por la recurrente, a tal efecto se adjunta al presente, como Anexo 2, copia simple de la autorización emitida por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones para presentar la información de separación contable de mis representadas en formato simplificado.

De igual forma también cabe llamar la atención de ese IFT que con Independencia de la autorización otorgada a favor de las sociedades que represento, la recurrente pasa por alto que la aplicación de los fundamentos legales que pretende utilizar para tener acceso a información confidencial de mis representadas, parte de la premisa de que los concesionarios tengan un nivel determinado de Ingresos (de acuerdo a la metodología que en dichos fundamentos se establece), mismos que no son obtenidos por mis mandantes, por lo que tampoco son aplicable en esa medida.

II.- Estados financieros

La recurrente fundamenta su petición en lo dispuesto por el artículo 6° Constitucional, señalando que de acuerdo a este numeral se reconoce el derecho fundamental de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna. Sin embargo, como también éste lo manifiesta, no toda la información en poder del Estado es pública y por tanto accesible a ella, pues existen límites que obligan a que determinada información sea reservada, ya sea porque es de interés público o bien porque aquella se refiere a la vida privada y datos personales que se erigen como un límite al principio general de publicidad y acceso a la información.

Ahora bien, para justificar el acceso a la información solicitada por la recurrente, esta parte de varias premisas, entre ellas, la obligación a cargo de los sujetos

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

obligados en términos de la LFTAIPG, a proporcionar la información relativa al otorgamiento de concesiones, como lo es la de una red pública de telecomunicaciones.

De acuerdo a la interpretación que hace la recurrente del artículo 7, fracción XII de la LFTAIPG, la información que se encuentran obligadas a proporcionar los sujetos obligados relativas al otorgamiento de concesiones no debe limitarse a la materias y documentos que establece el artículo 20 del Reglamento de la LFTAIPG, sino que debe incluir toda aquella documentación que informe sobre el desempeño de los concesionarios, en la medida en que constituye "un elemento indispensable para la toma de la decisión de revocar o prorrogar el título de concesión correspondiente".

Es decir, dicha documentación reflejará el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del concesionario lo que constituye información nodal para la rendición de cuentas respecto de asuntos públicos.

De ahí que concluya la recurrente que conocer dicha información permite valorar el aprovechamiento que los concesionarios hagan del bien concesionado, máxime si se toma en cuenta que la información solicitada consiste en información que debió de ser entregada por el concesionario al IFT, como es, entre otra, los estados financieros y su contabilidad, atento a lo dispuesto, entre otros, por la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones y por el artículo 177 de la LGSM.

Como podrá advertir ese Instituto, la recurrente pare de premisas que no encuentran un sustento en la legislación que cita, además de que pretende darle un alcance al contenido del artículo 7 de la LFTAIPG que no tiene y que escapa de su ámbito de regulación.

caite

Si bien es cierto, es un interés protegido por la norma el conocer la información relativa a las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones, ello no llega al extremo de permitir divulgar aquella información propia del negocio de cada uno de los concesionarios, como lo es los estados financieros y su contabilidad, y que les permiten competir entre cada uno de ellos.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Es decir, una cosa es que dicha información se entregue a la autoridad como regulador de un sector y que con ella supervise el cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone; y otra cosa es que bajo el falaz argumento de que dicha información se encuentra en poder de la autoridad esta pueda ser divulgada a un tercero ajeno a ésta.

En este punto, resulta relevante señalar que no existe disposición legal alguna que obligue a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones divulgar a terceros ajenos a ellos información como la que ahora pretende la recurrente exigir. Como ejemplo, basta tener en cuenta el contenido del artículo 177 de la LGSM cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisarios.

(Énfasis añadido)

De lo anterior se desprende que la publicidad de los estados financieros de una sociedad mercantil es una prerrogativa de sus accionistas y no como lo pretende hacer ver la recurrente una obligación a cargo de la sociedad a favor de terceros ajenos a ella. Como se observa, la intención del legislador es clara al restringir el derecho de información a favor de terceros ajenos a una sociedad, pues precisamente el fin que se persigue es evitar la divulgación de información que entorpezca el curso normal del negocio de una sociedad.

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio emanado de nuestro Poder Judicial de la Federación:

INFORMACIÓN CONTABLE. EL REQUERIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y CUESTIONES INHERENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA REQUERIDA POR QUIENES TIENEN LA CALIDAD DE SOCIOS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, SIGILO Y SECRETO. Los principios de sigilo y secreto sólo son aplicables a personas extrañas a la sociedad, esto es, a terceros ajenos a la estructura jurídica de la empresa; sin embargo, si quienes solicitan la información son los propios socios de la sociedad, luego entonces, la exhibición de la documentación requerida en forma alguna implica una

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

violación a la confidencialidad del estado financiero de la empresa requerida. Máxime que un asociado en términos del artículo 2683 del Código Civil para el Distrito Federal, tiene derecho a vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, de lo que resulta que con ese objeto puede examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. Por otra parte, la exhibición de la documentación requerida no viola la confidencialidad de dicha información pues la misma no correrá necesariamente agregada a los autos, toda vez que dicha exhibición de información no debe ser forzosamente presentada en el juzgado de origen sino que pueden optar por exhibirla dentro de las instalaciones de la empresa, ante la presencia de un funcionario judicial que dé fe de que dicha información se presenta a los socios solicitantes y que solamente sean éstos quienes tengan acceso a dichos documentos e inclusive puede realizarse dicha exhibición sin la presencia de una autoridad judicial que dé fe de ello aunque bajo la condición de que sean los socios solicitantes de la información quienes por escrito manifiesten su conformidad con la exhibición de la misma en esta modalidad, por lo que no se priva, coarta, limita o menoscaba el derecho de la empresa de guardar documentos que contengan información confidencial en materia industrial, comercial, contable ni económica, ya que dicho requerimiento no tiene como propósito divulgar la información que le sea proporcionada, sino dar solución al requerimiento de exhibición de diversa documentación relacionada con dicha empresa, ante la petición realizada por los propios socios que la conforman y que tienen derecho a su conocimiento en términos del artículo 2683 del Código Civil para el Distrito Federal⁸.

Como se observa, la información generada por una sociedad únicamente es susceptible de ser divulgada a favor de los integrantes de la misma pero de ningún modo puede estimarse que constituya una obligación su divulgación hacia terceros ajenos a la sociedad, pues ello equivaldría a violar en su perjuicio el derecho a la confidencialidad de su información.

En efecto, la recurrente pasa por alto que el tratamiento de los datos personales de una persona presupone la existencia de una expectativa razonable de privacidad que no puede ser superada por el derecho al acceso a la información de un tercero, por más que ésta se encuentre en poder del Estado, pues pensar lo contrario haría nugatorio el derecho a la privacidad de toda persona.

⁸ (9ª Época), SJF y su Gaceta, TCC, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 1.3o.C.767 C, Página: 1548.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Por otra parte, el hecho de que dicha información se encuentre en poder de una autoridad no es suficiente para estimar que la misma puede ser divulgada a terceros.

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio emanado de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PERSONAS. MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente⁹.

Como se observa, contrario a lo expuesto por la recurrente, el hecho de que la autoridad gubernamental tenga posesión de información entregada por un

⁹ (10ª. Época), Gaceta del SJF, Pleno, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: P. II/2014 (10a.), Página: 274

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

particular no es suficiente para estimar que esta se encuentre disponible para cualquier tercero, toda vez que el generador de la misma es, a su vez, titular del derecho fundamental de protección de los datos personales que en dicha información se contenga.

En la especie, la información solicitada por la recurrente, como lo es, entre otra, los estados financieros y contabilidad de mis representadas caen en dicha esfera de protección de datos personales, pues en esta se contiene información generada por aquellas que se considera confidencial y por ende reservada por contener elementos muy particulares del negocio de éstas.

Al respecto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP), establece como datos personales "aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este.". En este sentido, los estados financieros y la contabilidad de las sociedades que represento constituyen datos personales cuya divulgación implica un grave riesgo para estos, en atención al contenido de la misma que en poder de terceros podría causar un daño irreparable.

Al respecto resulta pertinente traer a cuenta, en su parte conducente, el contenido del artículo 3, fracciones V y VI de la LFPDP, a saber:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste

No obstante que la connotación que de datos personales se establece en el numeral en análisis refiere a aquella información concerniente a una persona física, no menos cierto lo es que también es aplicable a las personas jurídicas, tal y como quedó expuesto al inicio del presente escrito. Es decir, dicho concepto puede extenderse a la información de las personas morales que, aun cuando

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

técnicamente no pudiera denominarse como datos personales, de cualquier modo, es innegable que, las personas jurídicas si cuentan con un espacio que debe ser protegido constitucionalmente frente a terceros¹⁰.

Sígase de lo dicho que la información proporcionada por mis representadas incluyen datos que de ser divulgados a la recurrente afectarían su esfera jurídica, amén de que su utilización por parte de la recurrente causaría un grave riesgo ya que esta contiene información de aplicación industrial o comercial relativa a la forma en como mis representadas conducen la explotación de su negocio y que le permite mantener una competitividad frente a terceros, situación la anterior que se encuentra protegida por lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se repite en los siguientes términos:

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

De acuerdo a la cita que antecede, se desprende que la información otorgada con el carácter de confidencial al IFT por parte de mis representadas constituye un

¹⁰ CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2011 ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

secreto industrial que no puede ser divulgada y menos aún proporcionada a un tercero, toda vez que la información correspondiente a su contabilidad y los estados financieros es una información concerniente al patrimonio de las sociedades que represento, misma que tiene el carácter de privada y por tanto equiparables a los datos personales.

No pasa inadvertido el contenido del último párrafo del dispositivo legal en estudio, en cuanto que establece que no se considera como secreto industrial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, situación la anterior que no acontece en la especie, pues como el propio ordenamiento lo refiere "no se considera que la información es divulgada por disposición legal", cuando la información es proporcionada a una autoridad cuando sea para el efecto de obtener licencias, permisos autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

En la especie, como es del conocimiento de ese Instituto mi mandante se encuentra obligada a entregar información al IFT para continuar gozando del título de concesión que le fue otorgado. Es decir, de no entregar la información que ahora pretende obtener la recurrente a la autoridad competente las sociedades que represento se enfrentarían a un procedimiento sancionatorio que podría incluir la revocación de los títulos de concesión otorgados. De ahí que no le resulte aplicable, como lo pretende la recurrente, el último párrafo del artículo 82 en estudio.

Aún más, con el objeto de reforzar lo que se viene comentando en el sentido de que no es procedente la pretensión de la recurrente resulta pertinente tener en cuenta la Regla Trigésimo Sexta de los "Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el cual es del tenor siguiente:

"Trigésimo Sexto.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, el Reglamento y los presentes Lineamientos, los particulares podrán entregar a las dependencias y entidades con carácter de confidencial, aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley y de la cual sean titulares, entre otra:

I. La relativa al patrimonio de una persona moral;

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y ...".

De acuerdo a los lineamientos expedidos por ese Instituto queda por demás claro el hecho de que la información contable, entre ella, los estados financieros de una persona jurídica, constituye información confidencial que debe ser reservada y por tanto no disponible para la recurrente aún y cuando el recurrente pudiera ser una persona física, pues ello no limita la posibilidad de que pueda caer en manos de un competidor y con ello afectar la viabilidad de la explotación del negocio de mis representadas, máxime ante el temor fundado que atrás del recurrente pudiera estar alguno de los competidores de las sociedades que represento.

No pasa inadvertido la manifestación de la recurrente en el sentido de que "en el presente caso, ..., la información solicitada no se encuentra vinculada con hechos y actos de carácter económicos utilizados por la empresa, que pudieran ser útiles para un competidor.", sin embargo, ello resulta del todo inverosímil además de absurdo pues la información que pretende obtener, como lo es la contabilidad y los estados financieros de las sociedades que represento claramente tienen un carácter económico que de ser conocido por terceros pueden ser útiles para nuestros competidores, de ahí que la solicitud que realiza debe ser desestimada.

Por último, la recurrente señala que la clasificación que hace el IFT respecto a la confidencialidad de la información proporcionada se encuentra supeditada al hecho de que mis representadas cuenten con el derecho a reservarse la información y que ello no es así derivado del hecho de que existen diversos dispositivos legales, como lo es el artículo 177 de la LGSM, que según su parecer establece que toda sociedad anónima debe hacer público sus estados financieros, situación la anterior que ha quedado desvirtuada a lo largo del presente escrito.

III. Minutos cursados



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Alega la recurrente que por lo que respecta a los minutos cursados, la Regla Cuadragésima segunda de las Reglas del Servicio Local establece que los mismos deben constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona, ello en relación con los artículos 177 fracción XXI y 292 de la LFTyR y 36, fracción 11 del Estatuto Orgánico del IFT.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por la recurrente, ello de ninguna manera es así, puesto que el Registro Federal de telecomunicaciones a que se refieren los artículos 177, fracción XXI y 292 de la LFTyR y 36, fracción 11 del Estatuto Orgánico del IFT entraron en vigor con posterioridad a la fecha a que se refiere la información que pide la solicitante, por lo que resultan inaplicables.

El contenido de la Regla Cuadragésima segunda de las Reglas del Servicio Local es el siguiente:

"Regla Cuadragésimasegunda. Dentro de los 30 días naturales posteriores al término de cada trimestre calendario, los concesionarios de servicio local deberán presentar a la Comisión un informe en el formato de aplicación general previamente establecido por la misma, en donde se indique lo siguiente:

I. La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o troncales de conmutador, que existan al término del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

II. La cantidad total de troncales de interconexión asignadas a cada central local, desglosadas por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

III. Los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, e

IV. Informar respecto de las solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo.

En términos de la Ley, la Comisión procederá a la inscripción de la información antes indicada en el Registro de Telecomunicaciones.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Por su parte, el artículo 65 de la hoy derogada Ley Federal de Telecomunicaciones establece lo siguiente:

Artículo 65. La información contenida en el Registro a que se refiere el artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquélla que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial; dentro de ésta se incluirá la información referente a las bandas de frecuencias de uso oficial.

De lo anterior se tiene que si bien existe cierta información que podía ser objeto de inscripción en el Registro de telecomunicaciones, existía una salvedad a que la misma, por sus propias características se considere legalmente confidencial, como en la especie son los minutos cursados, por lo que en este caso no resulta procedente la entrega de la misma.

Atendiendo a lo expuesto en el presente resulta procedente que se confirme la resolución recurrida.

SEGUNDO. Finalmente, como se adelantó en la cuestión previa del presente escrito, en el supuesto nunca concedido de que llegara a considerarse que existe un derecho de la solicitante a conocer la información que consiste información personal de las empresas que represento, en cualquier caso un análisis de ponderación llevará a la negativa de su otorgamiento.

Lo anterior, en tanto si bien es cierto que toda persona podría tener un interés en el adecuado funcionamiento del sistema de telecomunicaciones, se trata de un interés simple, abstracto y general, que no goza de especial tutela en el orden jurídico, de tal suerte que debe ceder frente al perjuicio real y concreto que les causaría a mis representadas la revelación de su información confidencial, la cual está específicamente resguardada por las normas citadas a lo largo del presente escrito.

Sobre el interés simple y su regulación en el ordenamiento jurídico mexicano resultan aplicables por identidad de razón los criterios que se citan a continuación:

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.¹¹

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o

¹¹ (Tesis: 1a. XLIII/2013 (10a.)); 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo I; Pág. 822.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos.¹²

Si bien los criterios transcritos son propios del juicio de amparo, resultan útiles para nuestros efectos en la medida en que evidencian que no todo interés tiene la misma tutela en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso específico de la recurrente, el relativo al buen funcionamiento de las telecomunicaciones podría

¹² (TA); 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1793. IX.2o.2 A (10a.).

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

calificarse como un interés simple, en la medida en que la obtención de la información no se traduciría en un beneficio actual, directo y concreto en su esfera jurídica.

Ahora, no sobra mencionar que en la medida en que mis representadas desconocen la identidad de la solicitante -por estar sus datos personales testados en los documentos que le fueron entregados- existe también el riesgo de que la intención detrás de la solicitud sea la de un competidor que busca usar la información solicitada con fines comerciales. En este supuesto se acredita aún más la ponderación a favor de mi representada, pues se trata del supuesto específicamente tutelado por el artículo trigésimo sexto de los Lineamientos, que reconoce que es información confidencial "ii. la que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea".

En suma, es inconcuso que al realizar la ponderación entre la maximización de un interés simple como el de la recurrente que no sólo no cuenta con protección específica en el caso sino que puede esconder fines comerciales, versus un daño grave, real, directo e irreparable en perjuicio de mis representadas que se causaría con la revelación de información protegida constitucional y legalmente con carácter de confidencial, el resultado es la negativa en la entrega de la información, confirmado el oficio recurrido.

(...)

En virtud de los citados Antecedentes, y

CONSIDERANDO

9117
Primero.- Decreto de Reforma Constitucional. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, el "DOF") el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" (en lo sucesivo, "Decreto"), mediante el cual se creó al IFT como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la "Constitución") y en los términos que fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, debiendo cumplir con los principios de transparencia y acceso a la Información y deliberar en forma colegiada y decidiendo los asuntos por mayoría de votos; siendo sus sesiones, acuerdos y resoluciones de carácter público con las excepciones que determine la ley.

Segundo.- Integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 10 de septiembre de 2013, el Instituto quedó integrado como un órgano constitucional autónomo, en términos de lo dispuesto por el artículo Sexto transitorio del Decreto, mediante la ratificación por parte del Senado de la República de los nombramientos de los Comisionados que integran su órgano de gobierno y la designación de su Presidente.

Tercero.- Competencia. El artículo 61 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante, LFTAIPG) establece que los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán una instancia interna responsable de aplicar la LFTAIPG y resolver los recursos de revisión y reconsideración.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

En ese sentido, el artículo 35 del Estatuto Orgánico del Instituto, vigente a la fecha en la que se admitió el recurso de revisión, establecía que el Instituto contará con un Consejo de Transparencia facultado para resolver, en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables, los recursos de revisión que se interpongan en contra de las Resoluciones que emita el Comité de Información del Instituto y que estará integrado por un servidor público designado por el Pleno, el Secretario Técnico del Pleno, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el titular de la Contraloría Interna del Instituto.

Asimismo, el 6 de noviembre de 2013, en ejercicio de sus facultades constitucionales y estatutarias, el Pleno del Instituto designó a la Comisionada Adriana Sofía Labardini Inzunza como la Servidora Pública integrante del Consejo de Transparencia.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2013, en ejercicio de sus facultades constitucionales y estatutarias, el Pleno del Instituto aprobó el *"Acuerdo de Carácter General mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide las reglas de organización y funcionamiento de su Consejo de Transparencia, así como los procedimientos para la presentación y sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración a los que hace referencia el artículo 61 fracciones V y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental"* (en lo sucesivo el "Acuerdo de Carácter General"), el cual fue publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2013.

A su vez, el Estatuto Orgánico vigente al momento de resolver el recurso de revisión, publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2014, en vigor a partir del 26 del mismo mes y año, establece en su artículo 92 fracción I que El Instituto contará con un Consejo de Transparencia, con atribuciones para

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

resolver, en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables, los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que emita el Comité de Información, así como el recurso de reconsideración previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Ahora bien, en su recurso, el recurrente aduce que este Consejo es incompetente para resolver este recurso en los siguientes términos:

Es así, que resulta irrefutable que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo garante de la transparencia creado por disposición Constitucional, es el competente para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de órganos autónomos.

De ahí, que si tomamos en cuenta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un organismo constitucional, es inconcuso que en materia de transparencia, el órgano competente para conocer de los asuntos relacionados con acceso a la información pública en poder de aquél es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Ahora bien, debe destacarse que la facultad constitucional conferida al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, entró en vigor al día siguiente de su publicación, tal como lo establece el artículo Primero Transitorio del Decreto de Reforma publicado el 7 de febrero de 2014; no siendo óbice lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, pues éste condiciona única y exclusivamente el ejercicio de las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el artículo 6° constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se emita la legislación secundaria.

Es decir, el Poder Reformador de la Constitución dispuso que mientras no exista legislación secundaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no podrá conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley; así

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

como los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, sean atraídos.

Así, de una correcta interpretación del citado Sexto Transitorio, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 6° constitucional reformado, es dable sostener que cuando aquél precepto se refiere a "recursos de revisión", es en el sentido que lo establece el citado artículo constitucional, esto es, aquellos que se interpongan por los particulares respecto de las resoluciones de los órganos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal, máxime que el propio texto constitucional hace un reenvío expreso al mencionar: "en los términos que establezca la ley".

Por tanto, y tomando en consideración que no existe impedimento constitucional alguno, resulta inconcuso que el órgano competente para conocer el presente recurso de revisión contra actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por mandato constitucional, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; más aún si partimos de la base que TODOS los Poderes de la Unión y órganos autónomos constitucionales pueden ser revisables, ni modo que sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones se salve de dicho mandato constitucional.

Como puede observarse el recurrente argumenta que, como consecuencia del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de transparencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014, el órgano competente para resolver el presente recurso es el IFAI y no el Consejo de Transparencia. Esto en el entendido de que, conforme al artículo Primero Transitorio de este Decreto, la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Asimismo, el recurrente señala que no es óbice el artículo Sexto Transitorio de este Decreto, en el entendido que éste se refiere sólo a los recursos de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014
Folio del Recurso de Revisión: 2014006150
Expediente: 31/14

revisión que se interpongan por los particulares respecto de las resoluciones de los órganos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal.

Ahora bien, el Decreto *por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de transparencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014*, establece en la modificación al artículo 60. Constitucional, específicamente en el párrafo cuarto de la fracción VIII, que el organismo garante, creado mediante el citado Decreto, tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, **órganos autónomos**, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Al respecto, este Consejo considera que si bien es cierto que, conforme al artículo Primero Transitorio del Decreto mencionado anteriormente, éste entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF (es decir, el 8 de febrero de 2014), también es necesario remitirse a los artículos Segundo y Octavo Transitorios. Al efecto, estos artículos señalan que:

"SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 60. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un **plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.**"

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

De lo anterior, considerando que, hasta este momento, el Congreso de la Unión no ha expedido las reformas a las Leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la información que corresponden, se concluye que, en tanto se emiten dichas reformas, sigue en vigor el sistema de atribuciones y competencias establecido en la LFTAIPG.

De este modo, conforme a los artículos 3 fracción IX y 61 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los órganos constitucionales autónomos deben establecer un órgano encargado de resolver los recursos de revisión:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (...) IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (...)

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley. Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda: (...)
VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las demás facultades que le otorga este ordenamiento.

En términos de estas competencias establecidas en la LFTAIPG, en el presente caso, el órgano competente para resolver el recurso es el Consejo de Transparencia del Instituto. Toda vez que, como se ha señalado, el Instituto estableció en su Estatuto Orgánico y en el Acuerdo de Carácter General que el Consejo de Transparencia es la instancia interna competente para resolver los recursos de revisión.

En este mismo sentido, el Consejo advierte que IFAI ha resuelto dos recursos de revisión en el cual confirma implícitamente la competencia de este Consejo para resolver los recursos de revisión. En primer lugar, en la resolución del expediente RDA 1385/14, el IFAI señaló que:

"El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es incompetente para dictar resolución respecto del presente recurso de revisión, de conformidad con el marco normativo que a continuación se refiere.

Sobre el particular, resulta de gran relevancia precisar que el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, dispone lo siguiente (...)

De lo anterior, se advierte que con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Carta Magna y en los términos que fijan las leyes (...)

De lo anterior, se advierte que con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

De esta forma, dicho organismo autónomo se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión.

21/14



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

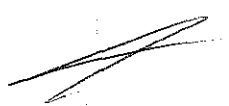
Expediente: 31/14

Asimismo, el referido organismo garante tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de, entre otros actores jurídicos, los órganos autónomos, como lo es, en el caso que nos ocupa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia entró en vigor al día siguiente al que su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 8 de febrero de 2014; también lo que es que el Congreso de la Unión no ha expedido la Ley General del Artículo 6º de la Carta Magna, ni las reformas que corresponda, entre otras leyes, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; toda vez que para ello, éste cuenta con un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación de dicho Decreto, esto es, un año contado a partir del 7 de febrero de 2014.

De ahí que en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el referido organismo garante ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el mencionado Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

Por lo anterior, resulta importante señalar que los artículos 3, fracción IX y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen lo siguiente (...)



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

En este sentido, cabe precisar que el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones dispone lo siguiente (...)

De lo anterior, se advierte que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un sujeto obligado por dicha Ley; sin embargo, en términos del artículo 61, los órganos, criterios y procedimientos para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en la Ley de la materia, incluyendo el procedimiento de acceso a la información y para la interposición de recursos de revisión.

En este sentido, los artículos 34 y 35 del mencionado Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecen lo siguiente (...)

Como puede observarse, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con un Consejo de Transparencia, el cual se encarga de resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que emita su Comité de Información; lo anterior, de conformidad con el artículo 61 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Derivado de lo anteriormente expuesto, se advierte que es Instituto es incompetente para conocer el presente asunto y, por tanto, el recurso de revisión promovido por la hoy recurrente debe desecharse por improcedente, de conformidad con el artículo 56, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

9117



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

No obstante, resulta importante señalar que en términos de lo establecido en el artículo 35 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo de Transparencia es la unidad administrativa que se encarga de resolver los recursos de revisión que deriven de las resoluciones del Comité de Información de dicho órgano autónomo; por tanto, este Instituto considera pertinente orientar a la particular para que, si es de su interés, presente su solicitud de información ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de los mecanismos de transparencia con los que cuente.”¹³

En segundo lugar, en la resolución del expediente RDA 3927/14, el IFAI indicó que:

“(…) Con ello, se debe mencionar que el diez de septiembre de dos mil trece, el pleno del Senado ratificó a los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con lo que dicho órgano quedó debidamente constituido.

Por lo tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos no es competente para conocer ni para resolver recursos de revisión o solicitudes interpuestas en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues dicho Instituto se encuentra ahora sujeto a lo previsto en el artículo 61 de la Ley de la materia.

¹³ Expediente: RDA 1385/14. Comisionada Ponente: Sigríd Arzú Colunga. Sujeto obligado ante el que se presentó la solicitud: Comisión Federal de Telecomunicaciones, ahora, Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Órgano Constitucionalmente Autónomo a partir del 11 de septiembre de 2013. Folio de la solicitud: 0912100011914, p. 12-19.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que derivado del cambio de la situación jurídica, como es la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, debe desecharse el presente recurso en virtud de ahora tener la calidad de Organismo Autónomo Constitucional, que emite sus propios reglamentos, acuerdos, criterios y procedimientos institucionales tanto para dar atención a las solicitudes de información que le son presentadas como de resolver aquellos recursos de revisión que deriven por inconformidad con las respuestas a dichas solicitudes.

No pasa desapercibido para este Instituto que en el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece lo siguiente:

"Artículo 34. El Instituto contará con un Comité de Información, cuyas funciones son las señaladas en el artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Dicho Comité estará integrado por un servidor público designado por el Presidente, el titular de la Unidad de Enlace y un representante de la Contraloría Interna.

ARTÍCULO 35. El Instituto contará con un Consejo de Transparencia facultado para resolver, en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables, los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que emita el Comité de Información. Dicho Consejo estará integrado por un servidor público designado por el Pleno, el Secretario Técnico del Pleno, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Titular de la Contraloría Interna."

Calli

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

De lo anterior, se advierte que el Consejo de Transparencia será la unidad administrativa que se encargue de resolver los recursos de revisión que deriven de las resoluciones del Comité de Información de dicho órgano autónomo; por tanto, este Instituto considera pertinente orientar al particular para que, si es de su interés, presente su solicitud de acceso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de los mecanismos de transparencia con los que cuente. Y en su caso, de igual forma los recursos de revisión correspondientes (...)"¹⁴

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha quedado debidamente integrado y es competente para resolver el recurso de revisión señalado al rubro, en términos de los artículos 3 fracción IX y 61 fracción VII de la LFTAIPG, y 92 de su Estatuto Orgánico.

Cuarto.- Procedencia. El recurso de revisión ante este Órgano Colegiado resulta procedente porque deviene de una solicitud de acceso a la información pública gubernamental, siendo así, es de explorado derecho que es un procedimiento en materia de transparencia, en el cual se ejerce el derecho de acceso a la información, mismo que se encuentra regulado por la LFTAIPG, la cual continúa vigente a la fecha.

Es de señalarse que los artículos 1o. y 2o. de esta Ley establecen lo siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la

¹⁴ Expediente: RDA 3927/14. Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford. Sujeto obligado ante el que se presentó la solicitud: Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta el 10 de septiembre de 2013, Comisión Federal de Telecomunicaciones. Folio: 0912100043414, p.16 y 17.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala"

De lo anterior se advierte que uno de los objetivos que persigue la ley es proveer lo necesario para garantizar el acceso a los gobernados a la información que esté en posesión de los entes obligados y este derecho se traduce en la realización de un acto positivo, esto es, en proporcionar la información solicitada por el gobernado.

No obstante lo anterior, existe información que por sus propias características debe ser clasificada, es inexistente, o bien, el particular puede considerar que la información entregada está incompleta, por lo cual, en términos de los artículos 40 y 50 de la LFTAIPG, se establece la procedencia de un recurso de revisión, en los casos en los que el solicitante decida impugnar la respuesta dada a su solicitud. Dichos artículos disponen:

9/11/14

"Artículo 49. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 50. El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

I. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

II. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;

III. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o

IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud."

Así, en el caso concreto, la pretensión del solicitante era obtener información de este Instituto, lo que conlleva a agotar, en caso de inconformidad, el recurso de revisión previsto en la ley antes de promover, si así lo considera, un juicio constitucional, pues se reitera que la intención del particular refleja el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

Por otro lado, que no es el caso referido en la presente resolución, la impugnación de normas generales, actos u omisiones del Instituto en relación a sus facultades de regulación en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones establecidos en el artículo 28 constitucional, supondría correcta la interposición de un juicio de amparo indirecto.

De lo anterior, es de resaltarse que el artículo 28, párrafo décimo noveno, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo 28.

...

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

..."

Por su parte, el artículo 94 constitucional dispone:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

...

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

..."

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que el citado artículo 28 dispone la interposición de un juicio de amparo indirecto contra normas generales, actos u omisiones de este Instituto, no obstante lo anterior, este refiere a aquellos actos derivados dentro del ámbito de atribuciones conferidas a este organismo autónomo en las materias de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

telecomunicaciones y radiodifusión, como lo es lo referente a la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y no así a aquellas relativas al derecho de acceso a la información como ocurre en el presente asunto.

En concordancia con lo anterior, el artículo 94 constitucional que invoca el propio artículo 28, hace referencia a la determinación de Juzgados de Distrito, así como Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, para conocer de los asuntos correspondientes a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; no obstante, estos no conocen de aquellos asuntos emanados dentro del procedimiento en materia de transparencia.

Quinto.- La solicitud de acceso a la información presentada por el recurrente fue atendida por la instancia competente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 43 de la LFTAIPG; es decir, la Unidad de Cumplimiento, misma que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Instituto, absorbió las facultades conferidas en su momento a la entonces Unidad de Supervisión y Verificación.

Asimismo, el artículo 14 del Acuerdo de Carácter General establece que las resoluciones del Consejo de Transparencia podrán:

- I. Desechar el recurso por improcedente, o bien, sobreseerlo;
- II. Confirmar el acto o resolución impugnado; o
- III. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y ordenar lo conducente.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Sexto.- Con el objeto de comprender, tanto el contenido de la SAI, como la respuesta otorgada a la misma, en seguida se desglosa la petición de información, entendiendo que el ahora recurrente solicitaba:

1. *Estados Financieros auditados de Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V.; de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.*
2. *Informes trimestrales que Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., hayan presentado en términos y/o con la información que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas de Servicio Local, en donde informa los minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen, con respecto al tráfico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.*
3. *Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.*

Ahora bien, la atención a la SAI 0912100050014 consistió informar al solicitante que, en función de las manifestaciones de la Unidad de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Cumplimiento, el Comité de Información en su XIX (Décimo Novena) Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de octubre de 2014, determinó lo siguiente:

Por lo que hace a los petitorios 1 y 3, se informó que se aprobaron con carácter de confidencial las versiones públicas de los reportes de reportes de estados financieros y de los reportes anuales definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, toda vez que presenta información financiera que comprende hechos de carácter económico y contable y a su vez, contiene información sobre cuentas de ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados, cuya clasificación tiene su fundamento en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el cardinal Trigésimo Sexto, fracción II de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Al respecto, cabe mencionar que en el mismo oficio de atención a la SAI, se hizo del conocimiento del solicitante que en los archivos de la UC no obra documentación relativa a estados financieros auditados y reportes de separación contable de Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., del año 2005, debido a que dicho operador inicio operaciones en 2006.

Para atender el petitorio 2 de la SAI, se informó al solicitante que el Comité de Información aprobó las versiones públicas, por contener datos con carácter confidencial, respecto a los siguientes requerimientos de la solicitud de acceso:

(I) La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

teléfono público o troncales de conmutador, que existan al termino del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

(ii) La cantidad total de troncales de interconexión asignada a cada central local, desglosada por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

(iv) solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo.

Lo anterior, debido a que contienen datos técnicos de la red del operador de telecomunicaciones y por lo tanto, guardan relación con el patrimonio de una persona moral de conformidad con lo establecido en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

De igual manera se informó que el Comité de Información aprobó las versiones públicas de la documentación referente a los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, toda vez que contiene ciertas partes o secciones que son consideradas como información reservada, toda vez que por disposición expresa de una Ley es considerada con tal carácter, tal como lo dispone el artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como los numerales cuarto, quinto, décimo quinto y vigésimo quinto de los

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014
Folio del Recurso de Revisión: 2014006150
Expediente: 31/14

Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 29, fracción III y 45 de la Ley y 70, fracción IV de su Reglamento.

Al igual que en los petitorios 1 y 3, también se hizo del conocimiento del solicitante que en los archivos de la UC no obra documentación relativa a los Informes trimestrales establecidos en la Regla Cuadragésima Segunda de la Reglas del Servicio Local, de Iusacell PCS de México, S.A. de C.V.; del año 2005, ya que dicho operador inicio operaciones en el año 2006.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 29, fracción III y 45 de la Ley y 70, fracción IV de su Reglamento.

Cabe señalar que, respecto a la información que no obra en archivos de la UC, la respuesta emitida al solicitante señala que toda vez que Iusacell PCS de México, S.A. de C.V. no se encontraba obligada a presentar la información a la que se hace en los tres puntos que preceden, no es necesario declarar formalmente la inexistencia, de conformidad con el Criterio 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual señala que "no será necesario que el comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia".

Por último, se hizo saber al solicitante que se están a su disposición las versiones públicas de referencia en 3 discos compactos (CD) o, en su caso,

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

en 9,737 copias simples o certificadas, indicando el costo por cada una de las modalidades, y que en función de su elección, la cual debería comunicar por correo electrónico, se estaría en posibilidad de hacerle llegar el formato de pago, por medio electrónico, con el monto que corresponda.

Al respecto, cabe mencionar que el solicitante realizó el pago correspondiente a la modalidad de discos compactos, dicho pago fue realizado el 26 de noviembre de 2014. Llama la atención que el recurso de revisión fue interpuesto el mismo día que realizó el pago por los derechos correspondientes, sin conocer las versiones públicas que se le deben entregar, y que el recurrente, hasta el día de celebración de las audiencias, 9 de marzo 2015, no se había presentado en las instalaciones del Instituto para recoger la información.

De la revisión de la respuesta otorgada a la SAI, se concluye que fue atendida de conformidad con la normatividad aplicable, toda vez que se atendió cada uno de los petitorios fundando y motivando, en su caso las clasificaciones hechas a los documentos, los cuales se pusieron a disposición del solicitante en versión pública, además de indicar que información que no se encuentra en los archivos de la UC, debido a que una de las empresas citadas no era concesionario durante el periodo referido en la SAI.

Respecto a la entrega de documentos que contengan información clasificada como confidencial, el artículo 43 de la LFTAIPG establece lo siguiente:

Artículo 43...

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas."

Asimismo, el artículo 70 fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece lo siguiente:

Artículo 70.-...

...

IV. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que contenga partes o secciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir al Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, así como la reproducción de una versión pública de los documentos que no estén clasificados o en los que se hayan omitido las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los expedientes o documentos clasificados. En su caso, el Comité procederá conforme lo establece el artículo 41 de este Reglamento y emitirá una resolución fundada y motivada, y (...)"

Ahora bien, con el objeto de entender también la naturaleza de los documentos solicitados, de los cuales, como ya se explica en párrafos anteriores, se procedió a poner a disposición del solicitante en versión pública, de aquellos que sí se encontraron en los archivos de la Unidad Administrativa a cargo de la atención de la SAI, en los siguientes considerandos, se analizará la información solicitada por separado relativa a:

- i) Estados Financieros
- ii) Informes trimestrales de conformidad con la Regla 42
- iii) Reportes anuales sobre separación contable

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Séptimo. El recurrente señala que el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente hasta junio de 2014, es decir aplicable para los años de 2005 a 2011 materia de la información solicitada, establece que toda sociedad anónima deberá hacer público sus estados financieros.

Si bien es cierto que, el ordenamiento citado establecía la obligación para todas las personas morales instituidas como sociedades anónimas, también lo es que el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no contempló, en la época a la que pertenece la información solicitada, ni en la actualidad a la Ley General de Sociedades Mercantiles como supletoria.

Aunado a lo anterior, no se cuenta con la certeza de que la información financiera que refiere dicho artículo se encuentre publicada por parte de las concesionarias que emitieron la información entregada al Instituto con carácter de confidencial.

Los estados financieros representan de una forma estructurada la situación y desarrollo o desempeño financiero de una entidad dentro de un periodo concluido, por lo que pueden ser considerados como información confidencial, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 18 de agosto de 2003.

Al efecto, el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, establece lo siguiente:

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

"Trigésimo Sexto.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, el Reglamento y los presentes Lineamientos, los particulares podrán entregar a las dependencias y entidades con carácter de confidencial, aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley y de la cual sean titulares, entre otra:

- I. La relativa al patrimonio de una persona moral;*
- II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, **contable**, jurídico o **administrativo** relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y*
- III. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad."*

Sirven también de apoyo a lo anterior los criterios 11/13 y 21/13 emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), que se transcriben en seguida

El Criterio 11/13 del IFAI establece lo siguiente:

Concesiones. La información que se proporciona para su otorgamiento, renovación o conservación y la derivada de su cumplimiento es pública, exceptuando aquella de carácter comercial o industrial. La concesión tiene por objeto conferir a un particular el ejercicio de ciertas prerrogativas públicas para la explotación de un bien o servicio público, por lo que toda la información derivada

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

del procedimiento que se lleva a cabo para su otorgamiento, su renovación o conservación y la relativa a su cumplimiento, en principio, es de carácter público. Lo anterior, ya que permite evaluar de forma directa el desempeño y el aprovechamiento del bien concesionado, así como la actuación de la autoridad otorgante. Sin embargo, de manera excepcional, cuando la información comprenda hechos o actos de carácter económico o financiero de los particulares, que pudieran ser útiles para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones de inversión o información que pudiera afectar sus negociaciones con proveedores o clientes, deberá elaborarse una versión pública, en la que deberá testarse únicamente dicha información, de conformidad con los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para considerar que dicha información es de carácter confidencial, no será suficiente que la misma sea entregada con tal carácter por los particulares a la dependencia o entidad, sino que deberá analizarse si, de conformidad con las disposiciones aplicables, éstos tienen el derecho de considerarla como confidencial.

El Criterio emitido por el IFAI con número 21/13 que establece lo siguiente:

Información de particulares. No basta que se haya entregado como confidencial a los sujetos obligados para tener dicho carácter. En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se considera información confidencial la entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de que se considere clasificada su información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En este sentido, para que determinada información sea considerada confidencial, no es suficiente que se entregue con ese carácter a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino que éstas deberán analizar la normativa aplicable, a fin de determinar si los particulares tienen el derecho de que se considere clasificada, ya sea por tratarse de información relativa al patrimonio de una persona moral, o bien, que pudiera resultar útil para un competidor por

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

comprender hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, entre otros.

Octavo. Respecto a la información relativa a los informes trimestrales sobre la Regla 42, el recurrente afirma que esta información es pública de conformidad con:

"(...)

La Regla 42 de las Reglas de Servicio Local en relación a la fracción relación XXII del artículo 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el artículo 36 fracción 11 y demás relativos del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prevén que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.

(...)"

Cabe mencionar que la Ley Federal de Telecomunicaciones fue abrogada mediante la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se puede deducir que los artículos citados por el recurrente corresponden a esta última.

El recurrente aduce que estas disposiciones prevén que la información sobre los minutos que cursen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones debe constar en un registro público de libre acceso para cualquier persona.

No obstante, el Consejo considera infundados estos argumentos por las siguientes consideraciones.

Al respecto, la Regla 42 de las Reglas de Servicio Local señala:



Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Regla Cuadragesimasegunda. Dentro de los 30 días naturales posteriores al término de cada trimestre calendario, los concesionarios de servicio local deberán presentar a la Comisión un informe en el formato de aplicación general previamente establecido por la misma, en donde se indique lo siguiente:

I. La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o troncales de conmutador, que existan al término del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

II. La cantidad total de troncales de interconexión asignadas a cada central local, desglosadas por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

III. Los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, e

IV. Informar respecto de las solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo.

En términos de la Ley, la Comisión procederá a la inscripción de la información antes indicada en el Registro de Telecomunicaciones.

Como se puede observar, la Regla 42 señala in fine que "en términos de ley" se procederá a la inscripción de todos los incisos señalados en el Registro de Telecomunicaciones. Dado que esta Regla hace una remisión expresa a la ley, es necesario remitirse a la Ley Federal de Telecomunicaciones, vigente al momento de la presentación de los reportes.

Al respecto, los artículos 64 fracción XVII, y 65 de esta Ley establecían:

Artículo 64. La Secretaría llevará el Registro de Telecomunicaciones, que incluirá el servicio de radiodifusión, en el que se inscribirán: (...) XVII. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

general derivados de esta Ley, de la Ley Federal de Radio y Televisión, u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

Artículo 65. La información contenida en el Registro a que se refiere el artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquella que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial; dentro de ésta se incluirá la información referente a las bandas de frecuencias de uso oficial.

Asimismo, el artículo 178 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece lo siguiente:

"El Instituto inscribirá la información a que se refiere la presente Ley sin costo alguno para los concesionarios ni para los autorizados; y dará acceso a la información inscrita en el Registro Público de Concesiones, mediante su publicación en la página de Internet, sin necesidad de clave de acceso o contraseña y contará con un sistema de búsqueda que facilite la navegación y la consulta de la información.

La información contenida en el Registro Público de Concesiones es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se considere de carácter confidencial o reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

(...)"

En este sentido, la información relativa a la Regla 42 debe constar en el Registro de Telecomunicaciones. Si bien, esto implicaría, en principio, que la información es pública, no obstante, tanto la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión previeron que la información del Registro es pública, salvo

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

aquella que, por sus propias características se considere como confidencial. Por esta razón, los argumentos hechos valer por el recurrente resultan infundados.

Ahora bien, a la luz de los artículos mencionados, es necesario analizar si, conforme a las disposiciones aplicables la información tiene el carácter de reservada o confidencial.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En este sentido, para considerar si una información tiene el carácter de confidencial o no es necesario remitirse a los artículos 18 fracción I y 19 de la LFTAIPG, los cuales disponen que:

Artículo 18 LFTAIPG. Como información confidencial se considerará:

I. La entrega con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 19 LFTAIPG. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información

24/17

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

Al respecto, este Consejo advierte que la información en comento sí fue presentada como confidencial. Asimismo, para dilucidar si los concesionarios señalados en la SAI, tenían el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, es necesario remitirse al Lineamiento Trigésimo Sexto de los "Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal":

"Trigésimo Sexto.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, el Reglamento y los presentes Lineamientos, los particulares podrán entregar a las dependencias y entidades con carácter de confidencial, aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley y de la cual sean titulares, entre otra:

- I. La relativa al patrimonio de una persona moral;*
- II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o **administrativo relativos a una persona**, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y*

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

III. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad."

Ahora bien, en el presente caso, la Regla 42 estipula lo siguiente:

Regla Cuadragesimasegunda. Dentro de los 30 días naturales posteriores al término de cada trimestre calendario, los concesionarios de servicio local deberán presentar a la Comisión un informe en el formato de aplicación general previamente establecido por la misma, en donde se indique lo siguiente:

I. La cantidad de números en servicio por central local y por grupo de centrales de servicio local, desglosados en residenciales, comerciales, de teléfono público o troncales de conmutador, que existan al término del trimestre inmediato anterior, así como respecto de las ampliaciones proyectadas para el trimestre en curso;

II. La cantidad total de troncales de interconexión asignadas a cada central local, desglosadas por tipo, capacidad y concesionario interconectado;

III. Los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red, e

IV. Informar respecto de las solicitudes de interconexión o de ampliación de las mismas que se encuentren pendientes de llevar a cabo.

En términos de la Ley, la Comisión procederá a la inscripción de la información antes indicada en el Registro de Telecomunicaciones.

En este sentido, por lo que hace a la información que pudieran contener los numerales I; II; y IV de la Regla 42 de las Reglas del Servicio Local, se considera que esta información versa sobre información técnica de la red del operador, y por lo tanto de su patrimonio.

Por lo cual, se considera que la información relativa a los numerales I; II; y IV de la Regla 42:

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

- i) Es relativa al patrimonio de la persona moral de los concesionarios, toda vez que contiene información técnica de su red;
- ii) Comprende hechos de carácter técnico dado que contiene información de su red

En consecuencia, esta información debe considerarse como confidencial en términos de los artículos 18 y 19 de la LFTAIPG, del numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

INFORMACIÓN RESERVADA

Este Consejo considera que la información solicitada, por lo que se refiere a minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen (es decir, la relativa a la fracción III de la Regla 42) debió clasificarse como reservada con fundamento en el artículo 14 fracción I, que establece lo siguiente:

"Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial"

Lo anterior debido a que, conforme a lo expresado por la UC, los reportes son usados por este Instituto también para fines estadísticos, pues son insumo para generar las estadísticas del sector de telecomunicaciones, por lo que éstos deben ser manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, sin que se puedan divulgar en ningún caso en forma nominativa o individualizada.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

De ahí que se reitere que la información no puede ser divulgada por el Instituto, considerando también el impedimento legal establecido en los artículos 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

ARTÍCULO 5.- La Ley garantiza a los informantes de datos estadísticos la confidencialidad de los que proporcionen. El Ejecutivo expedirá las normas que regulen la circulación y aseguren el acceso del público a la información estadística y geográfica producida.

ARTÍCULO 38.- Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él.

(...)

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo considera que la información relativa al numeral III de la Regla 42 (*III. Los minutos de tráfico público conmutado local, de larga distancia nacional de origen y de larga distancia internacional de origen que hayan sido cursados a través de su red*) es reservada de conformidad con el artículo 14 fracción I, en relación con los artículos 5 y 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica.

Por su parte, la información relativa los numerales I; II; y IV de la misma regla, es confidencial de conformidad con los artículos 18, fracción I y 19 de la LFTAIPG en relación con numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Noveno. Respecto a la información relativa a los reportes anuales sobre la separación contable, los cuales según el recurrente, son públicos de conformidad con el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión-publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014- y el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, establecen que los reportes anuales que presentan los concesionarios son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona, cabe mencionar lo siguiente:

En este sentido, el recurrente aduce que, de conformidad con estas disposiciones, los reportes anuales que presentan los concesionarios son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona. No obstante, el Consejo considera infundados estos argumentos por las siguientes consideraciones.

Al respecto, el artículo 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que:

"Artículo 292. Los concesionarios y las personas que cuenten con una autorización, cuando les sea aplicable, deberán proporcionar, asistir y facilitar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, para cada una de las concesiones o autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la información que se les requiera en cualquier momento para el cumplimiento de las funciones del Instituto.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al Instituto, toda la información relativa a la topología de sus redes, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos que las conforman, así como toda aquella que le permita al Instituto conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto cualquier información para integrar el acervo estadístico del sector, sin perjuicio de las facultades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La información a que se refiere el presente artículo, se deberá presentar de acuerdo a la metodología, formato y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto”.

Como puede observarse, el artículo citado sólo establece una obligación de los concesionarios para proporcionar cierta información contable, sin mencionar nada respecto a la publicidad.

Por su parte, el Cuarto Resolutivo de la Resolución que establece la Metodología para la Entrega de Información Contable por Servicio de Redes Públicas de Telecomunicaciones de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que:

“CUARTO. Los concesionarios deberán entregar a la Comisión los reportes definidos en el Manual una vez al año. Dichos reportes anuales deberán presentarse a más tardar el primer día hábil del mes de abril, conteniendo la información correspondiente al

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

Los reportes anuales indicados en el párrafo anterior deberán incluir las cifras comparativas respecto de la información contable correspondiente al año anterior."

De este modo, este Resolutivo sólo establece una obligación de entrega de reportes, sin hacer ninguna alusión a la publicidad de esta información.

Si bien los argumentos hechos valer por el recurrente no refieren directamente a la publicidad de la información, no obstante sí demuestran que la información solicitada (los reportes anuales de separación contable) es relativa al cumplimiento de obligaciones de un concesionario. Dado que este tipo de información, en principio, tiene el carácter de pública, podría deducirse que, en el presente caso, la información debe considerarse de esa manera.

Sin embargo, el artículo 18 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal señala:

Artículo 18. Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse una versión pública de las concesiones, permisos o autorizaciones, en la que no podrá omitirse aquella información que acredite el cumplimiento de obligaciones previstas para la obtención, renovación o conservación de la concesión, permiso o autorización de que se trate, salvo aquella información que se encuentre clasificada como confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Como puede observarse, la información que acredite el cumplimiento de obligaciones previstas para la conservación de la concesión es pública, salvo aquella información que se encuentre clasificada como confidencial en términos del artículo 18 de la LFTAIPG. En este sentido, el IFAI también ha señalado que no todo este tipo de información es pública, en el entendido que debe exceptuarse aquella con el carácter de confidencial.

Concesiones. La información que se proporciona para su otorgamiento, renovación o conservación y la derivada de su cumplimiento es pública, exceptuando aquella de carácter comercial o industrial. La concesión tiene por objeto conferir a un particular el ejercicio de ciertas prerrogativas públicas para la explotación de un bien o servicio público, por lo que toda la información derivada del procedimiento que se lleva a cabo para su otorgamiento, su renovación o conservación y la relativa a su cumplimiento, en principio, es de carácter público. Lo anterior, ya que permite evaluar de forma directa el desempeño y el aprovechamiento del bien concesionado, así como la actuación de la autoridad otorgante. Sin embargo, de manera excepcional, cuando la información comprenda hechos o actos de carácter económico o financiero de los particulares, que pudieran ser útiles para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones de inversión o información que pudiera afectar sus negociaciones con proveedores o clientes, deberá elaborarse una versión pública, en la que deberá testarse únicamente dicha información, de conformidad con los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para considerar que dicha información es de carácter confidencial, no será suficiente que la misma sea entregada con tal carácter por los particulares a la dependencia o entidad, sino que deberá analizarse si, de conformidad con las disposiciones aplicables, éstos tienen el derecho de considerarla como confidencial.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Ahora bien, para considerar si una información tiene el carácter de confidencial o no, es necesario remitirse a los artículos 18 fracción I y 19 de la LFTAIPG, los cuales disponen que:

Artículo 18 LFTAIPG. Como información confidencial se considerará:

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 19 LFTAIPG. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

Al respecto, este Consejo advierte que la información en comento sí fue presentada como confidencial. Asimismo, para dilucidar si los concesionarios mencionados en la SAI tenían el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, es necesario remitirse al Lineamiento Trigésimo Sexto de los "Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal":

"Trigésimo Sexto.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley, el Reglamento y los presentes Lineamientos, los particulares podrán entregar a las dependencias y entidades con carácter de confidencial,

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley y de la cual sean titulares, entre otra:

- I. La relativa al patrimonio de una persona moral;*
- II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y*
- III. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad."*

Ahora bien, en el presente caso, los reportes de separación contable representan de una forma estructurada la situación y desarrollo o desempeño financiero de una entidad dentro de un periodo concluido, en específico de ciertas cuentas de ingresos y costos relacionadas con el o los servicios concesionados.

En apoyo a lo anterior, cabe mencionar que, el Manual de Separación Contable emitido con relación al acuerdo P/271198/0279 del Pleno de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, en su numeral 3.2 Descripción de la metodología aplicable, señala que la metodología de costeo basado en actividades es una herramienta para usar la información de un sistema de contabilidad e identificar los costos reales de un servicio. Ahora bien, al provenir del mismo sistema contable que genera los estados financieros, refleja igualmente los ingresos y costos por servicio dentro de un periodo determinado.

En consecuencia, esta información:

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

- iii) Es relativa al patrimonio de la persona moral
- iv) Comprende hechos de carácter económico y contable, dado que contiene información sobre cuentas de ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados.

Por lo anteriormente expuesto, los reportes de separación contable pueden ser considerados como información confidencial, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la LFTAIPG, en relación con el numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 18 de agosto de 2003.

Décimo. Respecto a los argumentos vertidos en el numeral 4. *"Cuarto.- Se pide se revoque la clasificación y reserva hecha por el sujeto obligado respecto de la información solicitada, ya que éste incumplió lo dispuesto en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal"* es importante señalar que dichos lineamientos no son aplicables para el Instituto, por no pertenecer este a la Administración Pública Federal; no obstante, debido a que el Instituto no cuenta con lineamientos similares, éstos son tomados en consideración por las Unidades Administrativas al momento de elaborar las versiones públicas correspondientes, por lo que la cada uno de los discos compactos elaborados para tal efecto contienen un archivo en versión Word por cada una de las subcarpetas con el siguiente texto:

"ANEXO 1-Grupo Iusacell
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

A efecto de atender la Solicitud de Acceso a la Información ("SAI") con número 0912100050014, con relación a lo solicitado en el primer y tercer párrafos de la SAI que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación:

0912100050014:

"Estados Financieros auditados de Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V.; de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones".

Anexo al presente, el formato electrónico de la Versión Pública de los documentos respectivos, toda vez que contiene información confidencial en términos del artículo 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y al lineamiento Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Condición 7-4 de los Títulos de Concesión, toda vez que este Instituto no tiene el consentimiento expreso del propietario de la información para su difusión, mismo que es necesario ya que es información relativa al patrimonio de la persona moral, es decir, comprende información financiera y hechos de carácter económico y contable, como datos sobre ingresos y costos relacionados con los servicios concesionados.

Sirve como fundamento el segundo párrafo del artículo 43 de la LFTAIPG; 30 segundo párrafo de su Reglamento y se elabora la versión pública respectiva en la que se eliminan los renglones testados con fundamento en el artículo 18, fracción I y 19 de la LFTAIPG, en relación con el lineamiento Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Condición 7-4 de los Títulos de Concesión..”

Las versiones públicas de los documentos entregados tienen testada prácticamente la totalidad de la información vertida en los formatos, sobre los cuales, en cada una de las páginas se escribió una leyenda que indica cuales fueron las partes testadas, así como la fundamentación y motivación.

Esto en el entendido de que, si bien estos Lineamientos aplican para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y no para órganos constitucionales autónomos, como el Instituto, no obstante: i) estos fueron aplicados por la UC y el Comité de Información, ante la ausencia de disposiciones similares, por lo que ajustándose a estos ordenamientos se garantiza el acceso a la información y se brinda una mayor certeza jurídica a los solicitantes.

No obstante lo anterior, el recurrente no argumenta en contra de la forma y contenido de las versiones públicas, hecho que es evidente si tomamos en cuenta que al momento de presentar su recurso de revisión aún no contaba con las versiones públicas. Los argumentos del recurrente versan sobre las obligaciones que deben observar los sujetos obligados para emitir versiones públicas, específicamente en los artículos 3, 4, 17 y 18 de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, concluyendo que para elaborarse una versión pública, es necesario que los documentos contengan partes o secciones reservadas o confidenciales; por lo que según su percepción, la información solicitada no debía clasificarse.

Sin embargo, en los considerandos 5 al 8 se ha expuesto la fundamentación y motivación de la clasificación de la información solicitada.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Por otra parte, cabe señalar que, en relación a las manifestaciones vertidas por Grupo Iusacell mediante escrito presentado al Consejo de Transparencia con fecha 09 de marzo de 2015, se señala:

- Respecto a que considera improcedente el recurso de revisión ante este Órgano Colegiado y supone correcta la interposición de un juicio de amparo indirecto, es de resaltarse que el recurso de revisión ante este Órgano Colegiado resulta procedente porque deviene de una solicitud de acceso a la información pública gubernamental, siendo así, es de explorado derecho que es un procedimiento en materia de transparencia, en el cual se ejerce el derecho de acceso a la información, y mismo que se encuentra regulado por la LFTAIPG, tal como se explica abundantemente en el considerando Cuarto de la presente resolución, por lo que se reitera que la intención del particular refleja el ejercicio de su derecho a la información pública y no así la impugnación de normas generales, actos u omisiones del Instituto en relación a sus facultades de regulación en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones establecidos en el artículo 28 constitucional, razón por la cual no es viable el argumento que pretende hacer valer Grupo Iusacell.
- En relación al derecho a la privacidad del Tercero Perjudicado, se indica que si bien debe atenderse el principio de máxima publicidad de la información, de conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que en el presente caso la información de Grupo Iusacell quedó debidamente protegida por encontrarse dentro de las excepciones que a este principio establece la propia ley, por las características de la información solicitada por el hoy recurrente. Lo anterior, queda de manifiesto en los Considerandos Quinto a Octavo.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

- No se considera aplicable el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial al no cubrirse el supuesto que establece el párrafo segundo de dicho artículo, es decir, que para ser considerada como secreto industrial debiera estar necesariamente referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
- Por lo que se refiere a la ponderación de la solicitud en relación a que puede tratarse de un competidor que busca usar la información con fines comerciales, es de subrayarse que los artículos 1 y 2 de la LFTAIPG establecen que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen.

Asimismo, el artículo 6 de dicha legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, sin que se contemple distinción alguna de a quién se debe entregar o no cierta información.

Reforzando a lo anterior, el artículo 40 de la ley señala que cualquier persona o representante podrá presentar una solicitud de acceso a la información y en ningún caso la entrega de la información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

Siendo así, deviene inoperante dicha manifestación.

Por lo expuesto y fundado, este Consejo

RESUELVE

PRIMERO. En términos de los Considerandos Sexto, Séptimo y Décimo de la presente resolución, se **confirma** la respuesta otorgada a la SAI 0912100050014, respecto la solicitud de información relativa a *"Estados Financieros auditados de Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V.; de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011."*; toda vez que fue atendida de manera puntual de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia.

Call
SEGUNDO. En términos de los Considerandos Sexto, Octavo y Décimo de la presente resolución, se **confirma** la respuesta otorgada a la SAI 0912100050014, respecto la solicitud de información relativa a *"Informes trimestrales que Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., hayan presentado en términos y/o con la información que hace mención la Regla Cuadragésima Segunda de las Reglas de Servicio Local, en donde informa los minutos de tráfico público conmutado local, larga distancia nacional de origen y larga distancia internacional de origen, con respecto al tráfico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011."*; toda vez que fue atendida de manera

Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014
Folio del Recurso de Revisión: 2014006150
Expediente: 31/14

puntual de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia.

TERCERO. En términos de los Considerandos Sexto, Noveno y Décimo de la presente resolución, se **confirma** la respuesta otorgada a la SAI 0912100050014, respecto la solicitud de información relativa a *"Reportes anuales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 presentados por Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V., SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V., Portatel del Sureste, S.A. de C.V., Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., y Operadora Unefon, S.A. de C.V., definidos en el Manual de la Metodología de Separación Contable por servicio aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones."*; toda vez que fue atendida de manera puntual de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia.

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al recurrente en el domicilio y/o los medios señalados para tales efectos, así como a Grupo Iusacell, a la Unidad de Cumplimiento, al Comité de Información y a la Unidad de Enlace, para los efectos conducentes.

En sesión celebrada el 20 de marzo de 2015, mediante acuerdo número CTIFT/200315/13, así lo resolvieron los miembros del Consejo de Transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que estuvieron presentes durante la V Sesión de 2015, siendo el sentido de la votación el siguiente:



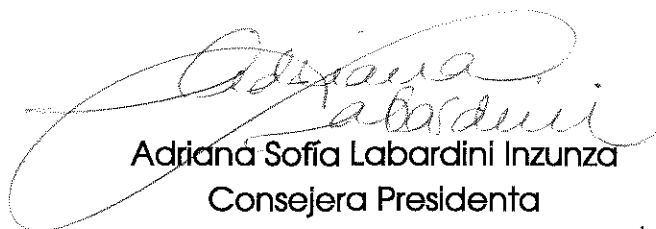
Folio de la Solicitud de Acceso a la Información: 0912100050014

Folio del Recurso de Revisión: 2014006150

Expediente: 31/14

El resolutivo El resolutivo PRIMERO se aprueba por mayoría de votos de los Consejeros Carlos Silva, Enrique Ruiz Martínez y Juan José Crispín Borbolla y el voto en contra de la Consejera Presidenta Adriana Sofía Labardini Inzunza.

Los resolutivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO se aprueban por unanimidad de los Consejeros presentes.



Adriana Sofía Labardini Inzunza
Consejera Presidenta



Carlos Silva Ramírez
Consejero



TITULAR DE LA CONTRALORÍA
INTERNA
Consejero



Juan José Crispín Borbolla
Consejero y Secretario de Acuerdos

Firma en suplencia por ausencia del Titular de la Contraloría Interna, en su orden, el Lic. Enrique Ruiz Martínez, Director de Responsabilidades y Quejas, en ejercicio de las atribuciones previstas para el Director General de Responsabilidades y Quejas, con fundamento en los artículos 82 primer párrafo y 88 en correlación con lo señalado en el artículo Noveno Transitorio del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014.